**Acta**

**Sesión Virtual 10-2019**

**Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad**

## **Fecha: 6 de noviembre 2019**

|  |
| --- |
| **INTEGRANTES** |
| *Magistrado Jorge Olaso Alvarez, Coordinador Comisión de Acceso a la Justicia* |
| *Sra. Melissa Benavides Víquez, Coordinadora Unidad de Acceso a la Justicia* |
| *Sra. María Felicia Zoch Badilla, representante de la Defensa Pública*  *Suplente: Sra. Gabriela Abarca Moram* |
| *Sra. Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas* |
| *Sr. Wilbert Kidd Alvarado, Subdirector Dirección Ejecutiva*  *Suplente: Sra. Katherine Hernández Molina* |
| *Sra. Carmen María Escoto Fernández, representante de sociedad civil* |
| *Sra. Nelda Beatriz Rojas Jiménez, representante de la Judicatura* |
| *Sra. Roxana Arrieta Meléndez, Directora Gestión Humana y Coordinadora Comisión Institucional de Empleabilidad* |
| *Sra. Olga Guerrero Córdoba, Subdirectora Gestión Humana* |
| *Sr. Francisco Azofeifa Murillo, Jefe Departamento Jurídico CONAPDIS* |
| *Sra. Andrea Sanchez, CONAPDIS* |
| *Sra. Mayela Pérez Delgado, representante del Ministerio Público/*  *Suplente: Sra. Evelyn Chavarría Brenes, representante suplente del Ministerio Público* |
| *Sr. Orlando Castrillo, Subdirector Tecnología de la Información* |
| *Sr. Franz Vega Zúñiga, representante de Medicatura Forense*  *Suplente: Sr. Edgar Madrigal Ramírez* |
| *Sr. Otto Lépiz, Coordinador del Mecanismo Nacional de Supervisión de las Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría de los Habitantes de la República* |
| *Sra. Yorleny Ferreto Solano, Organismo de Investigación Judicial* |
| *Sra. Angie Calderón Chaves, Unidad de Acceso a la Justicia* |
| *Sra. Daisy Quesada Guerrero, Escuela Judicial* |
| *Sra. Wendy Patricia Barrantes Jiménez, representante sociedad civil* |

***ARTICULO I***

La Unidad de Acceso a la Justicia solicitó la remisión de las posibles acciones que se realizarán en la Subcomisión a fin de incluirlas en el PAO 2021 mediante comunicado electrónico del 11 de setiembre. El 3 de octubre se trasladó esa gestión a las personas integrantes a fin de que hicieran las propuestas que estimaran pertinentes. La Coordinación de la Subcomisión remitió las siguientes propuestas mediante comunicados electrónicos del 3 de octubre de 2019, de las 8:25 y 10:44 horas:

*“… solicito por favor valorar la inclusión dentro del PAO 2021 de la Comisión de Acceso a la Justicia, en el ámbito de Discapacidad, lo siguiente:*

1. *El seguimiento de la propuesta de “Objetivos Operativos” de Acceso a la Justicia que se remitió a la Dirección de Planificación oportunamente para que sirviera a las oficinas de los diferentes ámbitos del Poder Judicial en la construcción de sus PAOS a fin de ofrecer opciones diferenciadas.*
2. *La ejecución de las actividades de capacitación coordinadas con la Escuela Judicial y la Dirección de Gestión Humana para impulsar los procesos de capacitación en la normativa nacional e internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.*
3. *Acciones vinculadas con la recién aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada ya, de un Capítulo Adicional de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, en la Ley 7.600. Esa ley contiene una serie de responsabilidades institucionales que desde ya deben planificarse para ser ejecutadas de manera idónea.*
4. *La inclusión de las recientes reformas a la Ley 7.600 en las políticas institucionales vinculadas con la construcción de edificios y alquiles de éstos, incluyendo el tema de parqueos especiales para personas con discapacidad.*
5. *El establecimiento de Controles Mínimos para todas las oficinas institucionales acerca del tratamiento a las personas usuarias internas y externas con discapacidad.*
6. *La implementación en forma coordinada con la Comisión Institucional de Empleabilidad, de la Política de Inclusión en el Empleo de Personas con Discapacidad, para que la reserva anual de puestos permita que éstos sean ocupados lo antes posible con personas con discapacidad.*
7. *Divulgar continuamente los derechos de las personas con discapacidad y los avances institucionales en ese ámbito contenidos en el informe que debe presentarse anualmente ante el órgano dispuesto por la Ley que adiciona un Capítulo sobre Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, a la Ley 7.600. Lo anterior con la colaboración del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.*
8. *Visibilizar estadísticamente los procesos judiciales en los que intervienen personas con discapacidad para que se reflejen en el sistema SIGMA para facilitar la emisión de decisiones estratégicas institucionales por parte de los órganos competentes.*

*Copio a las demás personas integrantes de la Subcomisión para que remitan sus valiosas sugerencias, desde sus ámbitos. Aprovecho para sugerir se valore la posibilidad de actualizar el PAO 2020 con acciones vinculadas a la implementación de la Ley que adiciona un Capítulo sobre Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, a la Ley 7.600.”*

Posteriormente, se adicionó lo siguiente:

*“En adición al comunicado anterior, solicito especialmente se considere la implementación de acciones por parte de la Comisión de Acceso a la Justicia y de sus diferentes Subcomisiones de la Política de Participación Ciudadana aprobada por Corte Plena, que en lo de interés indica:*

*“4.3 Responsables de la Implementación:*

*Comisión y Subcomisiones de Acceso a la Justicia:*

*Integrar de manera efectiva la representación de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en la Comisión y en las Subcomisiones.*

*Realizar sesiones de revisión y validación de las políticas, directrices y disposiciones institucionales, con los grupos en condiciones de vulnerabilidad para asegurar que sean inclusivas de poblaciones.*

*Divulgar el plan institucional de equiparación de oportunidades para poblaciones en condición de vulnerabilidad entre las organizaciones civiles, redes e instituciones públicas.*

*Fomentar la participación ciudadana en los planes anuales operativos de la Comisión y las Subcomisiones.*

*Crear mecanismos que garanticen la efectiva participación ciudadana de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.”*

*Es indispensable que las acciones de las Subcomisiones se generen con la participación activa de las poblaciones a las que van dirigidas y sus diferentes organizaciones, en especial la que nos ocupa de discapacidad, para quienes existe un régimen legal nacional e internacional.”*



*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO II***

Se comunica que el Magistrado Jorge Olaso Álvarez presentó Informe N° SI-77-2019 que rindió a Corte Plena sobre una normativa nueva que garantiza derechos para las personas con discapacidad: proyecto de ley denominado *“Reforma integral de varias leyes para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con discapacidad”*. Expediente legislativo n.° 21.311. La propuesta surge ante una evidente necesidad de reforzar la legislación con el fin de garantizar la óptima inserción de este sector de la población a la sociedad y cerrar la brecha existente. Entre ellas, se encuentran: la Ley n.° 7600 *“Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”*; Ley n.° 3503 *“Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores”*; Ley n.° 8862 *“Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público”*; Ley n.° 7739 *“Código de la Niñez y de la Adolescencia”*; Ley n.° 6868 *“Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje”*; Ley n.° 8634 *“Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo”*; Ley n.° 7969 *“Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi”*; Ley n.° 9049 *“Ley de Reconocimiento del Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) como Lengua Materna”*. Entre esas variaciones, destacan las relacionadas con materia laboral y seguridad social, tales como: el deber de las empresas y personas empleadoras de promover programas de capacitación productiva dirigidos a las personas con discapacidad en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (artículo 9); la capacitación laboral de personas con discapacidad con más de seis meses sin empleo, la toma de medidas pertinentes para reincorporarlas en funciones acordes con su condición de salud y el establecimiento de programas de apoyo para quienes asisten o cuidan a estas personas (artículo 10); posibilidad de elección de las casas proveedoras en lo referente a los aparatos que requieran -según sus necesidades- las personas con discapacidad (artículo 12).



*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO III***

Se informa sobre nueva ley que es ADICIÓN DEL CAPÍTULO VIII, ACCESO A LA JUSTICIA, AL TÍTULO 11 DE LA LEY N.º 7600, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 2 DE MAYO DE 1996. DECRETO LEGISLATIVO N.º 9714. EXPEDIENTE N. 20.840:

SAN JOSÉ - COSTA RICA

9714

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DEL CAPÍTULO VIII, ACCESO A LA JUSTICIA, AL TÍTULO 11 DE LA LEY N.º 7600; IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 2 DE MAYO DE 1996

ARTICULO ÚNICO- Se adiciona al título 11 de la Ley N.º 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, un nuevo capítulo VIII denominado "Acceso a la Justicia", el cual integra los nuevos artículos 56 al 68, y se corre la numeración subsiguiente. Los textos son los siguientes:

Artículo 56- Acceso

CAPÍTULO VIII

ACCESO A LA JUSTICIA

Para garantizar el derecho a la igualdad de acceso a la justicia, las personas responsables de su aplicación deben ofrecer los ajustes razonables y adecuaciones procedimentales que faciliten la autonomía y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad como participantes directas e indirectas en todas las etapas del proceso, así como en las diligencias preliminares. El Poder Judicial, en coordinación con el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis), promoverán que las instancias de administración de justicia cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en las respectivas jurisdicciones.

Artículo 57- Responsables de la aplicación

Deben garantizar el derecho al acceso a la justicia todas aquellas personas funcionarias del sistema de administración de justicia y quienes intervienen en su funcionamiento, a saber:

a) Las personas responsables del diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial.

b) Quienes ostentan funciones de personas juzgadoras, fiscalas y defensoras públicas y, en general, las que laboran en el sistema de administración de justicia y en las unidades de resolución alternativa de conflictos.

c) Personas profesionales en distintas disciplinas y funcionarias del Colegio de Abogadas y Abogados.

d) Garantes para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, según la Ley N.º 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, de 18 de agosto de 2016.

e) Todas aquellas personas que desempeñan funciones en lo referente a la defensa y protección de derechos humanos de las personas con discapacidad en la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de las Mujeres (lnamu), el Ministerio de Justicia y Paz, incluyendo al personal a cargo del Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los consultorios jurídicos de universidades y las contralorías de servicio.

f) Todas las personas del sector público que intervienen en el derecho de acceso a la justicia.

Artículo 58- Deberes generales

Con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Los responsables de la aplicación de esta ley promoverán campañas destinadas a proporcionar información sobre los derechos de las personas con discapacidad para su acceso efectivo a la justicia. La comunicación de la información incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braile, el lesco, la comunicación táctil, los microtipos, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, los medios de voz digitalizados y otros modos, los medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación que las nuevas tecnologías permitan ir incorporando, tomando en cuenta, además, variables de diversidad social, económica, cultural y geográfica.

b) Todas las oficinas de atención al público que operan en el sistema judicial y las que intervienen de una u otra forma en su funcionamiento deberán establecer actuaciones, procedimientos y requisitos simplificados y con los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, considerando todas las dimensiones de la accesibilidad.

c) Todas las oficinas que desempeñan funciones en lo referente a la defensa y protección de derechos humanos de las personas con discapacidad en la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de las Mujeres (lnamu), el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública, los consultorios jurídicos de universidades y las contralorías de servicio de todas las instituciones deberán establecer actuaciones, procedimientos y requisitos simplificados y con los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar un efectivo acceso a la justicia de esta población.

d) En los servicios y procedimientos se garantizará la participación efectiva y accesible de las personas con discapacidad, para lo cual se permitirá el uso de los apoyos, productos y servicios requeridos, promoviendo y asegurando el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones del derecho a su autonomía personal.

Artículo 59- Protección

Se deberá brindar protección particular a aquellas personas con discapacidad indiciadas, imputadas, víctimas y quienes van a prestar testimonio o declaración durante el proceso judicial. También, a las personas con discapacidad en situación de violencia intrafamiliar, violencia a un menor de edad con discapacidad, hostigamiento sexual y acoso laboral, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito, o bien, al momento en que se admita una medida cautelar. Para brindar la protección particular el juzgado o la oficina judicial correspondiente debe tomar nota de que la víctima, indiciado, imputado o testigo es una persona con discapacidad y aplicar las medidas de acceso a la justicia correspondientes.

Artículo 60- Asesoramiento

El Poder Judicial, sus dependencias y el Ministerio de Justicia y Paz deberán coordinar con la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como con las universidades que cuentan con consultorios jurídicos para brindar asesoramiento y orientación a las personas con discapacidad usuarias de sus servicios.

Artículo 61- Comunicación

Las personas con discapacidad auditiva tendrán derecho a contar con una persona intérprete de lengua de señas (lesco), o bien, con mecanismos alternativos de comunicación en cualquier etapa del proceso. Igualmente, las personas con discapacidad que tengan una lengua materna diferente del español deben contar con intérpretes, en caso de que no se puedan comunicar en español. Las personas con discapacidad cognitiva o visual tienen derecho a recibir cualquier comunicación en formato accesible.

Artículo 62- Ajustes razonables

Las personas responsables de su aplicación adoptarán las medidas necesarias en la tramitación de causas, resoluciones y ejecuciones, cuando por su condición, las personas con discapacidad lo requieran para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas. En tal sentido, cuando una persona con discapacidad se encuentre en un proceso judicial, el Poder Judicial deberá procurar las medidas y acciones necesarias para aplicar los ajustes razonables que sean necesarios e informarle sobre el sistema de apoyos que brinde el sistema jurídico.

Artículo 63- Capacitación

El Poder Judicial y sus dependencias, así como las oficinas que desempeñan funciones en lo referente a la defensa y protección de derechos humanos de las personas con discapacidad, tomarán las medidas necesarias para que los rofesionales, operadores y servidores del sistema judicial cuenten con capacitación para la adecuada atención de personas con discapacidad, de manera tal que se garantice una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. Se desarrollarán actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a la adecuada atención de las personas con discapacidad, tomando en cuenta lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y demás normativa vinculante.

Artículo 64- Solución alternativa de conflictos

Se promoverá la adopción de medidas específicas de un ambiente seguro, accesible y adecuado a los requerimientos de las personas que participen, pudiendo contar con una persona intérprete de ser necesario, que permitan la participación de las personas con discapacidad, familiar o encargado en el mecanismo elegido de resolución alternativa de conflictos, cuando corresponda.

Artículo 65- Información procesal o jurisdiccional

Las personas con discapacidad serán informadas, directa y personalmente por quien corresponda, sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en particular sobre la naturaleza del proceso. Esta información deberá otorgarse en la forma que mejor se adapte a sus requerimientos, tomando en consideración el uso de apoyos, productos y servicios, incluyendo las nuevas tecnologías.· Los procesos de capacitación que brinden los responsables de la aplicación de esta ley, a las personas con discapacidad que laboren en la institución, deberán adecuarse a tales requerimientos.

Artículo 66- Comprensión de las actuaciones judiciales

Las actuaciones judiciales deberán realizarse en formas y formatos accesibles, aumentativos y alternativos que faciliten la comprensión del acto judicial en el que participe una persona con discapacidad, garantizando que esta pueda comprender su alcance y significado. Previo a toda actuación judicial, personal debidamente capacitado atenderá las dudas, necesidades, significados, alcances, efectos, así como posibilitará el conocimiento de opciones, si las hubiera, que pueda presentar la persona con discapacidad, a fin de asegurar su\_ participación efectiva e informada en los actos que así se requiera.

Artículo 67- Condiciones de accesibilidad

El Poder Judicial, así como las oficinas que desempeñan funciones en lo referente a la defensa y protección de derechos humanos de las personas con discapacidad, deberán garantizar la accesibilidad en sus recintos judiciales y demás espacios físicos relevantes; además, deberá ser un espacio seguro y tranquilo. Se deberá velar por que las diligencias judiciales, las audiencias y los juicios se celebren sin dilaciones, de manera tal que la persona con discapacidad deba esperar el menor tiempo posible. El lenguaje utilizado en estas deberá adaptarse a las condiciones de la persona con discapacidad, así como a su edad, grado de madurez, nivel educativo y su facilidad para la comprensión; además, deberán considerarse las condiciones socioculturales.

Artículo 68- Seguimiento

Para dar seguimiento del derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad, las comisiones institucionales de accesibilidad y discapacidad, la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) constituirán un equipo que brinde asesoramiento y seguimiento en relación con la aplicación y el cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo. Cada doce meses se deberá rendir un informe detallado de la aplicación de la presente ley, a la Comisión de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve.



*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO IV***

Se comunica que el Magistrado Jorge Olaso Álvarez participó en el VI Encuentro de Investigación sobre Discapacidad organizado por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), a través del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (SICID). El encuentro pretende analizar a partir de los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), el trabajo teórico-metodológico realizado en la Encuesta, así como la elaboración de una agenda de investigación relacionados a la discapacidad. Se programó para el 29 y 39 de octubre de 2019 en el Best Western Irazú.

La participación del Magistrado Olaso fue en representación de la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.



*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO V***

La Unidad de Acceso a la Justicia remitió comunicado electrónico del 3 de setiembre de 2019, 11:51 a.m., a las personas coordinadoras de las Subcomisión, en el que señaló: “Reciban un cordial saludo. Según lo acordado en la reunión de “Validación de las Perspectivas de las Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad “realizada en el Salón del ILANUD, se les remite el link de la página de la Comisión de Acceso a la Justicia para que realicen sus comentarios y aportes. Como ustedes tienen conocimiento, nos encontramos trabajando en un cronograma muy puntual, por lo que las observaciones y demás información que consideren pertinente, se les solicita de la manera más respetuosa remitirla a más tardar el día de mañana antes de las 3 pm. El formato para el respectivo envío deberá ser un documento en Word con las indicaciones claras y especificas asimismo indicando las subcomisión que representan. Adjunto el link: [https://preview.uxpin.com/c8f06807eb57b2f55a03bc64967832517da0fb36#/pages/117620193/simulate/no-panels?mode=i](https://preview.uxpin.com/c8f06807eb57b2f55a03bc64967832517da0fb36" \l "/pages/117620193/simulate/no-panels?mode=i)”

De dicho comunicado se confirió traslado a las personas integrantes de la Subcomisión mediante comunicado electrónico del 6 de octubre de 2019, 11:34 pm.

*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO VI***

El 6 de octubre de 2019, 11:38 p.m., la jueza Damaris Vargas, Coordinadora de la Subcomisión remitió comunicado electrónico a las personas integrantes en el que señaló: *“Reciban un cordial saludo. A la vez, se les solicita remitir observaciones a la documentación adjunta vinculada con población en situación de discapacidad con el objetivo de obtener insumos para la realización del “Taller de Plan de Acción de las Políticas de las Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad”. En lo personal considero muy importante considerar dentro de la información de interés el PEI 2019/2024 del PJ y la Política Nacional de Discapacidad, con el objetivo de lograr la coordinación interinstitucional, así como los compromisos institucionales que nacen con la normativa más reciente aprobada por la Asamblea Legislativa de un Capítulo de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad en la Ley 7.600. Agradezco si pueden enviar las sugerencias el día de mañana a la Unidad de Acceso a la Justicia con copia a la suscrita para que sean consideradas en el Taller respectivo.”*

Por su parte, la señora Wendy Patricia Barrantes Jiménez remitió comunicado electrónico con las siguientes sugerencias:

*“Problemas encontrados: Población en situación de Discapacidad.*

* *Falta de previsiones de salas de juicio equipadas con sistemas electrónicos que faciliten a personas con discapacidad visual la información.*
* *Grifería y mobiliario que no se ajusta a requerimientos de personas con discapacidad, niños, niñas y otro.*
* *Facilidades, como parqueos, se otorgan por criterios como puesto que se desempeña o años laborales.*
* *Ascensores antiguos que no incluyen alertas lumínicas para personas sordas, ni sistemas audibles para personas con discapacidad visual.*
* *Edificios de más de una planta sin ascensor, con poco mantenimiento o en mal estado; o con ascensor, pero no son accesibles ya que para accesar a él hay gradas, Ejemplo: Edificio de Planificación.*
* *Salas de juicio con gradas y dispositivos (orugas) que no se ajustan a las sillas de ruedas de las personas, por lo que no sirven.*
* *Falta de refrescamiento al personal judicial en LESCO.*
* *Falta de señalización de rutas de evacuación ante situaciones de emergencia.*
* *No todas las actividades abiertas al público cuentan con la participación de personas intérpretes de LESCO y apoyos para personas con discapacidad.*
* *No siempre se solicitan personas intérpretes y traductoras, cuando así se requiere, para diferentes acciones y trámites judiciales.*
* *Los sistemas informáticos o estos no están en formatos accesibles a la condición de vulnerabilidad que presentan, por tener discapacidad sensorial (visual o auditiva), cognitiva, psicosocial u otra*
* *Limitada información comprensible para personas con discapacidad mental e intelectual”*

*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO VII***

En seguimiento de los acuerdos tomados por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, la señora Wendy Patricia Barrantes Jiménez, planteó sugerencia de circular a enviar al Consejo Superior, en ejecución de acuerdos tomados por la Subcomisión, la cual fue puesta en conocimiento de las y los integrantes, en forma previa a enviarse:

Circular N° XXX-2019

ASUNTO: Disposiciones normativas de acatamiento obligatorio respecto de los términos a emplearse al momento de referirse a las personas en situación de discapacidad tanto para personas usuarias externas como para servidoras judiciales, en cumplimiento de la Ley 8661 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y demás normativa conexa.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

Por acuerdo de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Discapacidad-Comisión de Acceso a la Justicia, se acordó solicitar al Consejo Superior reiterar  a las diferentes Oficinas Judiciales y Unidades Administrativas del país, que tienen bajo su responsabilidad velar por la debida ejecución del marco jurídico vigente en el tema de discapacidad en los diferentes circuitos judiciales del país, la necesidad de garantizarles el derecho a respetar la dignidad e igualdad a las personas usuarias internas y externas en situación de discapacidad para el cumplimiento de las Leyes N° 8661 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su reglamento bajo las siguientes disposiciones:

*“Artículo.6.- Concienciación Cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapacidad, este deberá presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. Ningún medio de información deberá emitir mensajes estereotipados ni menospreciativos en relación con la discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser consultadas sobre este tema.” Ley 7.600*

*“Artículo.8.- Toma de conciencia. 1.  Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:*

*a)  Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;*

*b)  Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;*

*c)  Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.*

*2.  Las medidas a este fin incluyen:*

*a)  Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:*

*i)  Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;*

*ii)  Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;*

*iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;*

*b)  Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;*

*c)  Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;*

*d)  Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.” Ley 8661.*

Por todo lo anterior, se deberá proporcionar a las personas en situación de discapacidad internas y externas del Poder Judicial, el debido respeto a su dignidad e igualdad como persona, empleando para ello los términos correctos de acuerdo al tipo de situación física, sensorial o psicosocial que presente. Para tal efecto, se adjunta la *“Guía para uso de lenguaje inclusivo”* emitida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). San José, 22 de agosto de 2019

Secretaría General de la Corte

Corte Suprema de Justicia”

La propuesta se hizo de conocimiento de las personas integrantes de la Subcomisión y las propuestas que se recibieron fueron incorporadas en el comunicado que se hizo al Consejo Superior, estando pendiente recibir respuesta del acuerdo respectivo.

*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO VIII***

La Unidad de Acceso a la Justicia remitió comunicado electrónico del 26 de setiembre de 2019 en el que señaló: *“Reciban un atento saludo. Por este medio se les extiende cordial invitación al “Taller construcción de Plan de Acción Políticas Institucionales de Acceso a la Justicia “que se ha coordinado en conjunto con la Dirección de Planificación para el viernes 25 de octubre de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el Salón Multiusos de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior con motivo de la actualización de las Políticas Institucionales en materia de Acceso a la Justicia. El objetivo es que asistan personas  integrantes de la Comisión y de las diferentes Subcomisiones de Acceso a la Justicia debido a su conocimiento y considerable experiencia en relación con las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad. La construcción de este Plan de Acción nos permitirá posteriormente la actualización de las políticas institucionales existentes, y la construcción de políticas nuevas para las poblaciones que aún no cuentan con una política. En este documento deberán incluirse todas aquellas posibles acciones de ejecución con alcance real que permitan mejorar el servicio que se brinda a las personas usuarias, y que permitan garantizar un efectivo acceso a la justicia. Por lo anterior se requiere contar con la participación de dos o tres personas por subcomisión, por lo que solicitamos de la manera más respetuosa la confirmación de la asistencia ya que el cupo es limitado.*

*\*Fecha: viernes 25 de octubre.*

*\*Hora: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.*

*\*Lugar: Salón Multiuso del Edificio de la Corte.”*

La señora Mayela Pérez Delgado remitió correo electrónico del 08 de octubre de 2019, 02:29 p.m., en el que señaló: *“Con ocasión del “Taller de construcción del Plan de Acción de Políticas Institucionales de Acceso a la Justicia”, en el cual se abordará el tema de la actualización de las Políticas Institucionales en materia de Acceso a la Justicia, para su valoración, respetuosamente remito las siguientes sugerencias (además de las que ya están establecidas y reconocidas):*

* *En el caso de las personas con discapacidad:  a) ofrecer facilidades para la inclusión laboral de las personas con discapacidad,  b)  asignación de espacios para parqueo (en particular para personas funcionarias  con discapacidad).*
* *Tomar en consideración la recién publicada circular 173-2019 de la Secretaría General de la Corte, relacionada con la “Modificación a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad”, mediante la cual –expresamente-, se incluyen mayor protección a todas las Personas en condición de Vulnerabilidad, se hace especial referencia a las Personas Migrantes y Refugiadas (en condición de refugio), personas Afrodescendientes, personas con diversa orientación sexual e identidad de género.”*



*SE ACUERDA: Se toma nota y se dispone solicitar a la Unidad de Acceso a la Justicia un informe de resultados del Taller.*

***ARTICULO IX***

Se conoce la Circular 173-19 que es actualización de las Reglas de Brasilia:

*“CIRCULAR No 173-2019*

*Asunto: “Modificación a la Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”.*

*A TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS Y PÚBLICO EN GENERAL*

*SE LES HACE SABER QUE:*

*La Corte Plena en sesión N° 36-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, artículo XXIV, se modificó las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que literalmente dicen:*

*REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD*

*Capítulo I: Preliminar*

*Sección 1ª.- Finalidad*

*(1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, directa ni indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales.*

*(2.) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato digno, adecuando el servicio a sus circunstancias singulares.*

*Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.*

*Sección 2ª.- Personas beneficiarias de las Reglas*

*1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad*

*(3) Una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.*

*En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.*

*(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas – culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, así como la victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género y la privación de libertad.*

*La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.*

*2.- Edad*

*5) Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud del ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.*

*Prevalecerá el interés superior de las personas menores de edad cuando interactúan con el sistema de justicia.*

*(6) El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funciona- les y/o barreras producto del entorno económico y social, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia, con pleno respeto a su dignidad.*

*3.- Discapacidad*

*(7) Se entiende por discapacidad la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y cualquier tipo de barreras de su entorno, que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.*

*A los efectos de estas Reglas también se encuentran en situación de discapacidad, aquellas personas que de manera temporal presenten tales deficiencias, que les limiten o impidan el acceso a la justicia, en igualdad de condiciones con las demás.*

*8) Se establecerán las condiciones necesarias de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen igualdad de trato, reconocimiento como persona ante la ley, respeto de su autonomía, capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación, sea ésta a través de cualquier medio tecnológico que requiera, atendiendo la brecha digital y cultural.*

*Se promoverá en los Poderes Judiciales la inclusión laboral de las personas con discapacidad.*

*4.- Pueblos y Comunidades Indígenas, Personas Afro- descendientes; Pertenencia a otras diversidades étnicas y culturales.*

*(9) Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante el sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen, identidad indígena o su condición económica. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los sistemas de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, idioma y tradiciones culturales.*

*Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas alternativas y restaurativas de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con los sistemas de administración de justicia estatal.*

*Se entenderá que existe discriminación hacia las personas afrodescedientes o pertenecientes a otras diversidades étnicas o culturales, cuando se produzcan situaciones de exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional, étnico o cultural que anulen o menoscaben el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública.*

*5.- Victimización*

*(10) A los efectos de estas Reglas, se considera víctima en sentido amplio, toda persona física o grupo de personas que hayan sufrido un daño ocasionado por una infracción del ordenamiento jurídico, incluida tanto la lesión física o psíquica, daños emocionales, sufrimiento moral y el perjuicio económico.*

*(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima que por el resultado de la infracción del ordenamiento jurídico, tenga una relevante limitación para prevenir, evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de dicha infracción o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización.*

*La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción. Especial consideración merecen por su doble condición de vulnerabilidad, las personas enunciadas en la Regla 3, párrafo segundo.*

*(12) Se alentará la adopción de medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos de la infracción del ordenamiento jurídico (victimización primaria).*

*Se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).*

*Se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.*

*6.- Migración, asilo y desplazamiento interno*

*13) El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente para aquellas personas en condición migratoria irregular.*

*Se considera persona trabajadora migrante a quien vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no es nacional. La condición migratoria de una persona no puede ser un obstáculo en el acceso a la justicia para la defensa de sus derechos.*

*Asimismo se reconocerá una protección especial a las personas beneficiarias del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a las solicitantes de asilo.*

*(14) También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad quienes han tenido que desplazarse internamente sin cruzar una frontera estatal internacionalmente reconocida.*

*Comprende a personas o grupos de personas que se ven forzadas u obligadas a escapar, huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos; asimismo, de situaciones de riesgo, provocadas por catástrofes naturales, cambio climático o por el propio ser humano, en cuyo caso se denominan personas damnificadas.*

*7.- Pobreza*

*(15) La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente agravado cuando concurre alguna otra causa de vulnerabilidad.*

*(16) Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia.*

*Se podrán proponer entre otras, medidas destinadas a la asignación de ayudas económicas para cubrir costos de desplazamiento, hospedaje y alimentación, aquellas encaminadas a lograr la comprensión del objeto y alcance de las actuaciones judiciales y las destinadas a establecer un sistema de asistencia jurídica gratuita.*

*8.- Género*

*(17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.*

*(18) Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.*

*(19) Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o afectación patrimonial a la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en el ámbito público como en el privado.*

*El concepto de violencia contra la mujer comprenderá la violencia doméstica, las prácticas tradicionales nocivas para la mujer, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como cualquier acción o conducta que menoscabe la dignidad de la mujer.*

*Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a diligencias, procedimientos, procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna. (antiguo artículo 20).*

*(20) Son causa de vulneración de acceso a la justicia, las acciones o conductas discriminatorias hacia las personas por motivo de su orientación o identidad sexual, o por razones de género.*

*9.- Pertenencia a minorías*

*(21) Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia.*

*10.-Privación de libertad*

*(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especial-mente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.*

*En el cumplimiento de estas medidas, corresponderá a la autoridad judicial velar por la dignidad de la persona privada de libertad y por sus garantías fundamentales, conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.*

*(23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo.*

*Sección 3ª.- Personas Destinatarias: responsables, integrantes y colaboradoras del sistema de justicia*

*(24) Serán destinatarias del contenido de las presentes Reglas las siguientes personas:*

*a) las responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial;*

*b) integrantes de la Judicatura, Fiscalías, Defensorías Públicas, Procuradurías y demás personal que labore en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país;*

*c) Profesionales en abogacía y derecho, así como sus colegios y agrupaciones;*

*d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman.*

*e) Policías y servicios penitenciarios.*

*f) Y, con carácter general, los poderes públicos con competencias en administración de justicia, los operadores (as) del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.*

*CAPÍTULO II: Efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos.*

*El presente Capítulo es aplicable a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos.*

*(25) Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.*

*Sección 1ª.- Cultura Jurídica*

*(26) Se promoverán, desde el primer contacto con las autoridades o con las Oficinas de Atención a la Víctima, todas las actuaciones y apoyos necesarios destinados a proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*(27) Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.*

*Sección 2ª.- Asistencia legal y defensa pública*

*1.- Promoción de la asistencia técnico jurídica de la persona en condición de vulnerabilidad*

*(28) Se constata la relevancia del asesoramiento técnico- jurídico para la efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad:*

*• En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, sin retrasos innecesarios e incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial;*

*• En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente;*

*• Y en materia de asistencia letrada a la persona privada de libertad.*

*(29) Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico- jurídica de la persona en condición de vulnerabilidad para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia técnica jurídica, consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados y abogadas todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar al acceso a la justicia, a la que se refiere la Sección 4ª del presente Capítulo.*

*2.- Asistencia de calidad, especializada y gratuita*

*(30) Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la asistencia*

*(31) Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad y confidencialidad de los servicios de asistencia y apoyo técnico-jurídicos de calidad, facilitados por las Administraciones Públicas a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones.*

*Las personas menores de edad cuya madre sea víctima de violencia de género o doméstica, tendrán derecho a medidas de asistencia y protección gratuitas.*

*Sección 3ª.- Derecho a personas intérpretes o traductoras*

*(32) Se garantizará la asistencia gratuita de una persona intérprete o traductora, cuando quien hubiese de ser interrogada o debiera prestar alguna declaración incluso como testigo, o cuando fuese preciso darle a conocer personalmente alguna resolución o documento, no conozca, no hable o no entienda el idioma utilizado en la actuación judicial respectiva.*

*Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral.*

*Las interpretaciones orales o en lengua de signos, deberán ser registradas mediante la grabación audiovisual de la manifestación original y de la interpretación, o en su caso documentadas por escrito.*

*Sección 4ª.- Revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia*

*(33) Se revisarán las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin.*

*1.- Medidas procesales*

*Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan la regulación del procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación con los requisitos exigidos para la práctica de los actos procesales.*

*(34) Requisitos de acceso al proceso y legitimación*

*Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de la participación de otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos de estas personas.*

*(35) Oralidad.*

*Se promoverá la oralidad para mejorar las condiciones de celebración de las actuaciones judiciales contempladas en el Capítulo III de las presentes Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, y favorecer una mayor agilidad en la tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del retraso de la resolución judicial sobre la situación de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*(36) Formularios.*

*Se promoverá la elaboración de formularios de fácil manejo para el ejercicio de determinadas acciones, estableciendo las condiciones para que los mismos sean accesibles, gratuitos y garantizando su confidencialidad y protegiendo los datos de las personas usuarias, especialmente en aquellos supuestos en los que no sea preceptiva la asistencia letrada.*

*Este tipo de formularios podrán también extenderse a los familiares de la víctima, en los términos que se establezcan cuando se trate de situaciones que hayan causado perjuicios de especial gravedad, o en los supuestos que la persona usuaria no pueda realizar los trámites personalmente.*

*(37) Anticipo jurisdiccional de la prueba.*

*Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas instancias judiciales.*

*2.- Medidas de organización y gestión judicial*

*Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas políticas y medidas que afecten a la organización y modelos de gestión de los órganos del sistema judicial, de tal manera que la propia forma de organización del sistema de justicia facilite el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas políticas y medidas resultarán de aplicación a quienes administren justicia.*

*(38) Agilidad y prioridad.*

*Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia.*

*Se colocará en los expedientes un distintivo visible, que permita identificar que el proceso afecta a personas en condición de vulnerabilidad.*

*(39) Coordinación*

*Se establecerán mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales, orgánicos y funcionales, destinados a gestionar las interdependencias de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte o participan en el sistema de justicia.*

*(40) Especialización.*

*Por parte de los poderes públicos con competencias en administración de justicia se adoptarán medidas destinadas a la especialización de quienes operan el sistema judicial y de quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento, para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad y en particular, las víctimas necesitadas de especial protección y a personas menores de edad con discapacidad. En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los asuntos a órganos especializados del sistema judicial.*

*(41). Actuación interdisciplinaria.*

*Se destaca la importancia de la constitución y actuación de equipos multidisciplinarios, integrados por personas profesionales de las distintas áreas, así como la elaboración de protocolos de actuación conjunta para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*(42) Proximidad.*

*Se promoverá la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación.*

*Sección 5ª.- Medios alternativos de resolución de conflictos*

*1.- Medios Alternativos y Personas en condición de Vulnerabilidad*

*(43) Se impulsarán los medios alternativos de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del Proceso como durante la tramitación del mismo.*

*Los medios alternativos de resolución de conflictos, deben integrarse en los servicios que las administraciones públicas han de ofrecer a las personas usuarias del sistema de justicia y en especial a las personas en condición de vulnerabilidad.*

*La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a optimizar el funcionamiento de los servicios formales de justicia.*

*(44) En todo caso, antes de utilizar una forma alternativa de solución en un conflicto concreto, se tomarán en consideración los derechos humanos de las personas intervinientes, así como las circunstancias particulares de cada una, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas.*

*Se fomentará la capacitación integral y sensibilización de las personas mediadoras, árbitros, facilitadoras judiciales comunitarias y demás personas que intervengan en la resolución del conflicto. Especialmente importante resulta incluir formación en materia de derechos humanos, género, diversidad e interculturalidad.*

*2.- Difusión e información*

*(45) Se deberá promover la difusión de la existencia y características de estos medios entre los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley permita su utilización.*

*(46) Cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en la resolución de un conflicto mediante cualquiera de estos medios deberá ser informada, con carácter previo, sobre su contenido, forma y efectos. Dicha información se suministrará de conformidad con lo dispuesto por la Sección 1ª del Capítulo III de las presentes reglas.*

*A tal efecto se elaborarán los correspondientes protocolos de actuación.*

*3.- Participación de las personas en condición de vulnerabilidad en los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos*

*(47) Se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en el mecanismo elegido de Resolución Alternativa de Conflictos, tales como la asistencia de profesionales, participación de intérpretes, o la intervención de la autoridad parental para las personas menores de edad cuando sea necesaria, o con la asistencia, apoyo o representación legal cuando su condición lo requiera.*

*La actividad de Resolución Alternativa de Conflictos debe llevarse a cabo en un ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de las personas que participen.*

*Sección 6ª.- Sistema de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas, Afrodescendientes, o pertenecientes a otras diversidades étnicas y culturales*

*(48) Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, la comunidad afrodescendiente y otras diversidades étnicas y culturales.*

*Se propiciará la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal y los medios de administración de justicia tradicionales de las comunidades mencionadas, basadas en el respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.*

*(49) Además serán de aplicación las restantes medidas previstas en estas Reglas en aquellos supuestos de resolución de conflictos fuera de las comunidades indígenas, afrodescendientes y pertenecientes a otras diversidades étnicas y culturales, por parte del sistema de administración de justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente abordar los temas relativos al peritaje cultural y/o antropológico, y al derecho a expresarse en el propio idioma.*

*Capítulo III: Celebración de actuaciones judiciales.*

*El contenido del presente Capítulo resulta de aplicación a cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte o en cualquier otra condición.*

*(50) Se velará para que en todas las actuaciones judiciales, en las que participe una persona en condición de vulnerabilidad, se respete su dignidad, otorgándole un trato diferenciado adecuado a las circunstancias propias de su situación*

*Sección 1ª.- Información procesal o jurisdiccional*

*(51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.*

*1.- Contenido de la información*

*(52) Cuando la persona en condición de vulnerabilidad participe en una actuación judicial, en cualquier condición, será informada sobre los siguientes extremos:*

*•La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar.*

*•Su papel dentro de dicha actuación*

*•La modalidad de apoyo o asistencia que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la información de cuál organismo o institución puede prestarlo.*

*(53) Quien sea parte en el proceso o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aquella información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Los órganos competentes deberán adoptar todas las medidas pertinentes para suministrarla Dicha información deberá incluir al menos:*

*•La modalidad de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales.*

*•Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, incluida la posibilidad de ejercitar la acción de manera individual o colectiva.*

*•La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a la asistencia técnico-jurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea contemplada por el ordenamiento existente.*

*•La modalidad de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo.*

*Se facilitará a las personas con discapacidad información sobre las actuaciones judiciales, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.*

*2.- Tiempo de la información*

*(54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando se trate de un procedimiento penal, así como los procedimientos para garantizar un efectivo acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*3.- Forma o medios para el suministro de la información*

*(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Los Estados garantizarán la creación y desarrollo de oficinas de información u otras entidades creadas al efecto.*

*Se promoverá la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de manera accesible, comprensible y adaptadas a la concreta situación de vulnerabilidad.*

*4.- Disposiciones específicas relativas a la víctima*

*(56) Se promoverá que las víctimas reciban información, desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios (as), sin retrasos innecesarios, sobre los siguientes elementos del proceso judicial:*

*Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuna información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.*

*Derecho a denunciar y en su caso el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación.*

*Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica, y en su caso condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.*

*Posibilidad de solicitar medidas de protección, cautelares y, en su caso procedimiento para hacerlo.*

*Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso procedimiento para reclamarlas.*

*Servicios de interpretación y traducción disponibles.*

*Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles.*

*Procedimiento por medio del cual la víctima puede ejercer sus derechos en el caso de que resida en el extranjero.*

*Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos.*

*Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para comunicarse con ella.*

*Servicios de justicia restaurativa disponibles en los casos legalmente procedentes.*

*Supuestos en los que puede obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso procedimiento para reclamarlo.*

*Esta información será actualizada en cada fase del procedimiento para garantizar a la víctima la posibilidad de ejercer sus derechos.*

*(58) Cuando exista riesgo para la vida, integridad psicofísica y/o el patrimonio, de la víctima, se le informará de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéllas que se refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar.*

*Se garantizarán mecanismos de prevención para evitar la revictimización y sistemas de protección y atención para víctimas y testigos.*

*Sección 2ª.- Comprensión de actuaciones judiciales*

*(58) Toda persona en condición de vulnerabilidad, tiene el derecho a entender y ser entendida.*

*Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión de las actuaciones judiciales, en las que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado.*

*1.- Notificaciones y requerimientos*

*(59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias.*

*Se procurará que el instrumento de notificación sea acompañado de un documento en formato accesible, según la condición de discapacidad conforme a los avances tecnológicos que torne idónea y comprensible la comunicación a la persona destinataria.*

*2.- Contenido de las resoluciones judiciales*

*(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Deberá respetarse el uso de lenguaje inclusivo.*

*3.- Comprensión de actuaciones orales*

*(61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo.*

*Sección 3ª.- Comparecencia en dependencias judiciales*

*(62) Se velará para que la comparecencia en los actos y actuaciones judiciales de una persona en condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las circunstancias propias de dicha condición.*

*1.- Información sobre la comparecencia*

*(63) Con carácter previo al acto o actuación judicial, se procurará proporcionar a la persona en condición de vulnerabilidad información directamente relacionada con la forma de celebración y contenido de la comparecencia, ya sea sobre la descripción de la sala y de las personas que van a participar, ya sea destinada a la familiarización con los términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al efecto.*

*2.- Asistencia*

*(64) Previa a la celebración de la actuación. Se procurará la prestación de asistencia por personal especializado (profesionales en Psicología, Trabajo Social, personas intérpretes, traductoras u otras que se consideren necesarias) destinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la celebración de la vista judicial; al servicio de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*(65) Durante el acto judicial.*

*Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y demás actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de una persona profesional, cuya función será la de contribuir a garantizar los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad.*

*También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de vulnerabilidad.*

*3.- Condiciones de la comparecencia*

*Lugar de la comparecencia*

*66) Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo.*

*(67) Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima, entendida en los términos de la Regla 10 con la persona presuntamente infractora; así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procuran- do la protección visual de la víctima y evitando su revictimización.*

*Tiempo de la comparecencia*

*(68) Se procurará que la persona en condición de vulnerabilidad espere el menor tiempo posible para la celebración del acto judicial.*

*Los actos judiciales deben celebrarse puntualmente, no obstante para fijar la fecha y hora de las actuaciones judiciales, deberán tomarse en consideración las particulares circunstancias de la persona en condición de vulnerabilidad; entre otras: ubicación y condiciones geográficas del lugar de residencia, distancia con la sede judicial, medios de transporte y horarios de traslado.*

*Cuando esté justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o prelación a la celebración del acto judicial en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad.*

*(69) Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente deberán comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. Se procurará asimismo la concentración en el mismo día de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba participar la misma persona.*

*(70) Se recomienda analizar la posibilidad de preconstituir la prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible de conformidad con el Derecho aplicable.*

*(71) En determinadas ocasiones podrá procederse a la grabación en soporte audiovisual del acto, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales en los términos establecidos en la Regla 37.*

*Forma de la comparecencia*

*(72) Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las necesidades y particularidades de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el tipo y el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla*

*(73) Quienes participen en el acto de comparecencia no deben emitir juicios o críticas sobre el comportamiento de la persona en condición de vulnerabilidad.*

*(74) Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabilidad de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública. Podrá plantearse la posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones especialmente adaptadas que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de la vista, siempre que resulte compatible con el Derecho del país.*

*A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del circuito cerrado de televisión.*

*4.- Seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad*

*(75) Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses.*

*(76) Se prestará especial atención a fin de tomar las medidas pertinentes en aquellos supuestos en los que la persona está so- metida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, personas menores de edad víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja, o víctimas de delitos de odio.*

*5.- Accesibilidad de las personas con discapacidad*

*(77) Se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá la eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas, de información, comunicación y actitudinales facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios judiciales.*

*6.- Participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales*

*(78) En los actos judiciales en los que intervengan personas menores de edad, se tendrá en cuenta su edad y desarrollo integral.*

*A tales fines los actos judiciales:*

*• Se realizarán en espacios amigables, incluyéndose la posibilidad de que puedan ser escuchados sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación.*

*• Se facilitará la comprensión utilizando un lenguaje sencillo.*

*• Se evitarán todos los formalismos innecesarios tales como la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares.*

*7.- Personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, personas afrodescendientes y a otras diversidades étnicas y culturales*

*(79) En la celebración de los actos judiciales se res- petará la dignidad y cosmovisión, las costumbres y las tradiciones culturales de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, personas afrodescendientes y otras diversidades étnicas y culturales conforme al ordenamiento jurídico de cada país.*

*Sección 4ª.- Protección de la intimidad*

*1.- Reserva de las actuaciones judiciales*

*(80) Cuando el respeto de los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad lo aconseje, podrán adoptarse las medidas necesarias para su protección y en particular la posibilidad de que las actuaciones judiciales orales y escritas no sean públicas, de tal manera que solamente puedan acceder a su contenido las personas involucradas, así como impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las personas en situación de vulnerabilidad.*

*2.- Imagen*

*(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad, por lo que deberán adoptarse las medidas pertinentes para ello.*

*(82) En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su desarrollo como persona.*

*3.- Protección de datos personales*

*(83) En las situaciones de especial vulnerabilidad, deberá evitarse la divulgación y publicidad de los datos de carácter personal de quienes se encuentran en esa condición.*

*(84) Se garantizará la protección de los datos personales contenidos en soporte digital o en otros soportes que permitan su tratamiento automatizado.*

*CAPÍTULO IV: Eficacia de las Reglas*

*Este Capítulo contempla expresamente una serie de medidas destinadas a fomentar la efectividad de las Reglas, de tal manera que contribuyan de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*1.- Principio general de colaboración*

*La eficacia de las presentes Reglas está directamente ligada al grado de colaboración entre las personas e instituciones destinatarias, tal y como vienen definidos en la Sección 3ª del Capítulo I.*

*La determinación de los órganos y entidades llamadas a colaborar depende de las circunstancias propias de cada país. Quienes impulsen las políticas públicas deben poner un especial cuidado tanto para identificar a dichos órganos y entidades, como para recabar su participación y mantener su colaboración durante todo el proceso.*

*(86) Se implementará un foro permanente para el cumplimiento de las presentes reglas en el que también puedan participar los diferentes actores a los que se refiere el apartado anterior, y que podrá establecerse de forma sectorial*

*(87) Se destaca la importancia de que el Poder Judicial colabore con los otros Poderes del Estado en la mejora del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, a través de estrategias concretas de cooperación interinstitucional.*

*(88) Se promoverá la participación de las autoridades federales y centrales, de las entidades de gobierno autonómico y regional, así como de las entidades estatales en los estados federales, dado que frecuentemente el ámbito de sus competencias se encuentra más próximo a la gestión directa de la protección social de las personas más desfavorecidas.*

*(89) Cada país fomentará la participación de las entidades de la sociedad civil por su relevante papel en la cohesión social, y por su estrecha relación e implicación con los grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad.*

*2.- Cooperación Internacional*

*(90) Se promoverá la creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias en esta materia entre los distintos países, analizando las causas del éxito o del fracaso en cada una de ellas o, incluso, fijando buenas prácticas.*

*Estos espacios de participación pueden ser sectoriales.*

*En estos espacios podrán participar representantes de las instancias permanentes que puedan crearse en cada uno de los Estados.*

*(91) Se insta a las Organizaciones Internacionales y Agencias de Cooperación para que:*

*• Continúen brindando su asistencia técnica y económica en el fortalecimiento y mejora del acceso a la justicia.*

*• Tengan en cuenta el contenido de estas Reglas en sus actividades, y lo incorporen, de forma transversal, en los distintos programas y proyectos de modernización del sistema judicial en que participen.*

*• Impulsen y colaboren en el desarrollo de los mencionados espacios de participación.*

*3.- Investigación y estudios*

*(92) Se promoverá la realización de estudios e investigaciones en esta materia, en colaboración con instituciones académicas y universitarias.*

*4.- Sensibilización y formación de profesionales*

*(93) Se desarrollarán actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a la adecuada atención de las personas en condición de vulnerabilidad a partir de los contenidos de las presentes Reglas, atendiendo a las necesidades de cada grupo de personas beneficiarias.*

*(94) Se adoptarán iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a todas aquellas personas del sistema judicial que, con motivo de su intervención en el proceso, tienen un contacto con las personas en condición de vulnerabilidad.*

*Se considera necesario integrar el contenido de estas Reglas en los distintos programas de formación y actualización, dirigidos a las personas que trabajan en el sistema judicial, para ello se realizarán cursos de formación permanente a través de las Escuelas Judiciales de los distintos países.*

*5.- Nuevas tecnologías*

*(95) Se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso tecnológico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.*

*6.- Manuales de buenas prácticas sectoriales*

*(96) Se elaborarán instrumentos que recojan las mejores prácticas en cada uno de los sectores de vulnerabilidad, y que puedan desarrollar el contenido de las presentes Reglas adaptándolo a las circunstancias propias de cada grupo.*

*Se elaborará periódicamente un catálogo de instrumentos internacionales, en formatos físicos y digitales accesibles, referidos a cada uno de los sectores o grupos mencionados anteriormente.*

*7.- Difusión*

*(98) Se promoverá la difusión de estas Reglas entre los diferentes destinatarios de las mismas definidos en la Sección 3ª del Capítulo I.*

*(99) Se fomentarán actividades con los medios de comunicación para contribuir a configurar actitudes en relación con el contenido de las presentes Reglas.*

*8.- Comisión de seguimiento*

*(100) Se constituirá una Comisión de Seguimiento con las siguientes finalidades:*

*•Elevar a cada Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las presentes Reglas.*

*•Proponer un Plan Marco de Actividades, a efectos de garantizar el seguimiento a las tareas de implementación del contenido de las presentes reglas en cada país.*

*•A través de los órganos correspondientes de la Cumbre, promover ante los organismos internacionales hemisféricos y regionales, así como ante las Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, la definición, elaboración, adopción y fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las personasen condición de vulnerabilidad.*

*•Proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de estas Reglas.*

*•Proponer la convocatoria de un concurso de buenas prácticas en el ámbito de la comunidad jurídica iberoamericana.*

*•Canalizar las iniciativas de formación y difusión sobre las Reglas en el ámbito de la comunidad jurídica iberoamericana.*

*La Comisión estará compuesta por cinco miembros designados por la Cumbre Judicial Iberoamericana.*

*En la misma podrán integrarse representantes de las otras Redes Iberoamericanas del sistema judicial que asuman las presentes Reglas. En todo caso, la Comisión tendrá un número máximo de nueve miembros.*

*San José, 13 de abril de 2019*

*Licda. Silvia Navarro Romanini*

*Secretaria General*

*Corte Suprema de Justicia*

*Ref.: 4816-19.”*



*SE ACUERDA: Se toma nota de la Circular 173-19.*

***ARTICULO X***

Se conoce información socializada por el Magistrado Olaso sobre actividades de CONAPDIS en la Semana Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad para su divulgación, la cual fue compartida a todas las personas integrantes de la Subcomisión.



Se conoce propuesta de agenda para la celebración del Día internacional de las Personas con Discapacidad:



Finalmente, se conoce propuesta remitida por la señora Melissa Benavides Víquez.

*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO XI***

Se conoce gestión formulada por el señor Josué, la cual fue puesta en conocimiento de las y los integrantes de la Subcomisión para su conocimiento en comunicado electrónico del 11 de octubre de 2019, 01:41 p.m., incluyendo a la Dirección de Gestión Humana. En ella se indica:

*“El Suscrito Nombre 002, mayor, soltero,Abogado,cédula Valor 001 vecino de Alajuela ante Ustedes en forma respetuosa vengo a decir: Por la presente  me permito exponerles con todo respeto mi situación laboral en el Poder Judicial con la finalidad de que si es posible ustedes me puedan ayudar : En octubre del 2013 se me nombró como Meritorio en el otrora llamado Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Heredia. Mi labor desde ese entonces ha consistido básicamente en guardar expedientes, atención al público, alistar correspondencia y llevarla al correo, solicitarle las identificaciones a los usuarios que llegan a Audiencias y entregárselas a los Jueces y labores similares. Ahora bien, estando en el Tribunal se me ha nombrado ocasionalmente como Técnico pero en muy pocas ocasiones, algunas veces 8 días y el nombramiento más largo que se me ha hecho ha sido de 1 mes, pero como repito han sido muy pocas veces las que se me ha nombrado. En total el plazo aproximado por el cual he estado nombrado es de 3 a 4 meses. Estando nombrado en ese Tribunal yo terminé mis estudios como Abogado y me gradué como tal, sin embargo debo admitir que difícilmente yo podría desempeñarme como Juez ya que no tengo experiencia ni siquiera como Técnico. No omito manifestar que en ese Tribunal han sido muy buenos conmigo y actualmente me permiten ir a laborar 3 días por semana como Meritorio pero aunque yo vivo con mis padres ya que soy soltero y no tengo vicios de ningún tipo a mí me gustaría que se me nombrara para poder tener un salario.  He realizado varios Cursos Virtuales, sin embargo en una ocasión una de mis Jefes amablemente me dijo que yo me desempeño mejor no como Técnico, es decir, resolviendo sino que ella ha notado que yo me desempeño mejor realizando funciones mecánicas como las que ya indiqué que me ponen a hacer hoy en día (correspondencia etc). Asumo que me dicen esto debido a que hasta donde yo tengo entendido yo padezco de Asperger y por ello soy una persona introvertida, muy tímida y sensible y que a la hora de explicarme las cosas se debe de tener un poquito de paciencia conmigo.   Por último quisiera decirles que de acuerdo con lo antes expresado y  de acuerdo con mi personalidad y mi forma de trabajar a mí me agradaría trabajar realizando una labor más mecánica,como podría ser en un archivo, en la Medicatura Forense o en los Tribunales pero realizando este tipo de labores ya que yo me desempeño mejor en estas actividades o algunas similares. Estoy dispuesto a laborar en Heredia o en San Joaquín de Flores. Por lo anterior solicito  analizar mi caso y se me comunique cualquier resolución al correo electrónico* Valo 002



*SE ACUERDA: 1° Se toma nota. 2° Solicitar a la Dirección de Gestión Humana un informe sobre la factibilidad de la gestión planteada.*

***ARTICULO XII***

En comunicado electrónico del 15 de octubre de 2019, 08:20 a.m., la jueza Damaris Vargas comunicó que *“… las señoras  Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, y Lizbeth Barrantes Arroyo, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, remitieron Oficio DE-938-2019 de 30 de setiembre 2019 a la señora Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, en el que hacen de conocimiento que en el marco de la función fiscalizadora del Conapdis, el Subproceso de Fiscalización de la Dirección Técnica, cuenta con un Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA), aplicable tanto a instituciones públicas como municipalidades; cuyos componentes constituyen obligaciones y responsabilidades establecidas en el marco jurídico para toda la institucionalidad pública. Agregan, el IGEDA comprende un ejercicio de autoevaluación por parte de las instituciones públicas y municipalidades, con el propósito de determinar el avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, incorporando indicadores de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, de participación y de resultados, lo que permitirá medir el cumplimiento de cada entidad y determinar las categorías en que se debe mejorar, en consonancia con la normativa de acatamiento obligatorio que rige esta materia. La recolección de la información del IGEDA se realizará mediante una herramienta digital a la cual se podrá ingresar con una clave que se le proporcionará oportunamente. Señalan las gestionantes que para poder cumplir con lo anterior y en acatamiento con lo establecido en el Decreto N° 40635-MP-MDHIS-PLAN-MTSS, en el Artículo 10 de Responsabilidades de las personas jerarcas de las instituciones públicas, inciso G que textualmente indica: Designar a la persona titular representante de la entidad del más alto nivel técnico, con acceso al nivel político y poder para toma de decisiones, quien a su vez fungirá como coordinador de la Comisión en Discapacidad y como punto focal de todos los asuntos sobre discapacidad, que deban ser tratados por la entidad de que se trate (el subrayado no pertenece al documento original); se requiere se designe a la persona que servirá como punto focal del Poder Judicial, a quien se le brindará el usuario y la clave de ingreso a la plataforma del Igeda. El nombre de la persona designada como punto focal de todos los asuntos sobre discapacidad deberá ser comunicado al correo electrónico* [*igeda@conapdis.go.cr*](mailto:igeda@conapdis.go.cr)*, así como su correo electrónico y número telefónico. La Dirección Ejecutiva trasladó el oficio en referencia al Magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, quien a su vez lo traslada a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad para que se designe a la persona designada y se informe al Ministerio de Planificación. Con ocasión de lo anterior, respetuosamente someto a su consideración mi sugerencia de que sea el Magistrado Jorge Olaso Álvarez la persona designada ante IGEDA al estimar es quien cumple con el perfil requerido al ser “del más alto nivel técnico, con acceso al nivel político y poder para toma de decisiones”, no solo por su condición de Magistrado Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia sino además, por sus amplios conocimientos en los derechos de las personas con discapacidad y políticas institucionales, para que asuma la representación como punto focal de todos los asuntos sobre discapacidad, que deban ser tratados por el Poder Judicial. Lo anterior, sin perjuicio del apoyo incondicional de la suscrita como coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad. Estaré atenta a sus indicaciones, pues el Oficio en referencia debe ser contestado a más tardar el día de hoy. Saludos cordiales.”*

Se seleccionó en representación de la Subcomisión al Magistrado Jorge Olaso Álvarez, quien aceptó.

*SE ACUERDA: Se toma nota.-*

***ARTICULO XIII***

En comunicado electrónico del 28 de octubre de 2019, 02:49 p.m., la Unidad de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, remitió el Oficio CJ-39-2019 PJ-DGH-SACJ-2070-2019 enviado por la Sección Administrativa de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura el citado día, a las 11:21 am, en el que se señala:

*“ARTÍCULO VIII*

*Documento: 19818-19*

*La señora Wendy Barrantes Jiménez, Coordinadora a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia, comunicó el acuerdo de esa Comisión, que literalmente indica:*

*“Por este medio se remite para su estimable conocimiento, el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad celebrada el pasado 10 de septiembre de 2019, en donde se acordó:*

*“ARTICULO II:*

*La Unidad de Acceso a la Justicia remitió el Oficio CACC-279-2019 de 12 de agosto de 2019 a las personas integrantes de la Subcomisión, en el que hizo de conocimiento el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad celebrada el pasado 01 de julio de 2019, Artículo IX, en donde se acordó:*

*“Informa la señora Melissa Benavides Víquez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia que en reuniones sostenidas con la Dirección de Gestión Humana, se atendió en diferentes sesiones las propuestas de ésta sobre la atención a la capacitación en LESCO.*

*Las recomendaciones son las siguientes:*

*Se considera necesario fortalecer el programa actual de comunicación básica en lengua de señas costarricense; extender la cantidad de módulos de cuatro a seis con 40 horas cada uno, eso resulta un total de 240 horas.*

*Para la escogencia de estas personas se debe aplicar el perfil establecido, personas colaboradoras, con vocación de servicio, con gran sensibilidad hacia las necesidades de los demás, habilidad de comunicación verbal y no verbal.*

*Ofrecer el programa de comunicación básica en Lesco en cada cabecera de provincia, considerar aumentar la cantidad de cupos en San José (65% de la población).*

*Para las dependencias que se sitúan en circuitos judiciales, especializar al menos a dos personas clave. Asimismo, por medio de procesos formales de escogencia a cargo de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, gradualmente y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, la institución vaya certificando profesionalmente como intérpretes a estas personas claves.*

*Realizar refrescamientos y actualizaciones a las personas que ya han aprobado el programa completo de lengua de señas, con actividades de práctica y sensibilización una o dos veces al año.*

*Las capacitaciones formales en Lesco ofrecidas a personal judicial deben contener, adicional al dominio de las señas, la temática de sensibilización, protocolos de servicio para la población sorda y señas en expresiones jurídicas.*

*El Subproceso Gestión de la Capacitación está desarrollando dos cursos virtuales denominados “Derechos Humanos de las personas con discapacidad” y “Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad”, se sugiere establecer estos cursos con carácter obligatorio para la población que se forma en los programas de lengua de señas costarricense.*

*Que la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y la Unidad de Acceso a la Justicia.*

*Asuman el mantenimiento, actualización y divulgación de la lista oficial de personas capacitadas en Lesco.*

*Que realicen las acciones necesarias para aumentar la cantidad de señalizadores visuales y escritos en los edificios.*

*Que se validen otros métodos de atención a la población que no maneja Lesco ni sabe escribir.*

*Que valore la implementación de softwares especializados con personas traductoras en línea y/o sistemas informáticos de apoyo.*

*Que gestionen los recursos económicos que se requieren para fortalecer el servicio.*

*Que determinen y gestionen los procesos de sensibilización requeridos.*

*Que la Contraloría de Servicios complemente este diagnóstico con un estudio de identificación de necesidades o deficiencias del servicio judicial prestado.*

*Que la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Unidad de Acceso a la Justicia y la Contraloría de Servicios:*

*Elaboren de manera participativa con la comunidad sorda, un Protocolo de atención a las personas con discapacidad.*

*Que promuevan acciones periódicas que procuren el mantenimiento y actualización de los conocimientos adquiridos para las personas servidoras judiciales que han sido capacitadas en Lesco.*

*Que definan la prioridad de cuáles oficinas o personas debe brindárseles la formación en Lesco.”*

*SE ACUERDA: … 2°. Se trasladan las recomendaciones de la Dirección de Gestión Humana a las y los integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad a efecto de que informen su anuencia o no de asumir los compromisos que se indican en las recomendaciones indicadas de acuerdo a las funciones institucionales asignadas a las Subcomisiones”.*

*La integrante Maria Felicia Zoch Badilla, en comunicado electrónico del 4 de julio de 2019, señaló: “En atención al acta 05-19, con respecto al artículo IX, en cuanto al mantenimiento, actualización y divulgación de la lista de personas capacitadas en el lenguaje lesco, considero que mediante la página web que está en construcción se puede divulgar la misma. Sin embargo, en cuanto al tema del mantenimiento de dicho listado y su actualización, considero que Gestión Humana podría ayudarnos con dicha función, por el movimiento del personal del Poder Judicial.”*

*Por su parte, la integrante Mayela Pérez Delgado, en correo enviado el 13 de agosto de 2019, indicó: “En cuanto al punto, en el que se indica: El Subproceso Gestión de la Capacitación está desarrollando dos cursos virtuales denominados “Derechos Humanos de las personas con discapacidad” y “Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad”, se sugiere establecer estos cursos con carácter obligatorio para la población que se forma en los programas de lengua de señas costarricense. Considero que es necesario que el curso sea obligatorio para todas las personas funcionarias del Poder Judicial (no solamente para quienes se forman en los programas de lenguaje de señas costarricenses). Es importante para brindar conocimientos y sensibilizar a toda la población judicial.”*

*Así mismo, señala la señora Pérez que el Consejo Superior en sesión 78-2018, Artículo XXXII, ante una gestión formulada por la Fiscalía Adjunta de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, se dispuso:*

*“En oficio N°UCS-0240-MP-2018 del 21 de agosto de 2018, dirigida a la licenciada Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, la licenciada Mayela Pérez Delgado, Fiscala Adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, solicitó:*

*“(…)*

*Solicito se gestione ante el Consejo Superior la autorización para que las personas funcionarias del Ministerio Público puedan asistir al curso LESCO I y II.*

*Como es de su conocimiento, el curso es gestionado por el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, con el objetivo de cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 2017-09630 del 23 de junio de 2017, a través de la cual declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por una persona usuaria externa con una condición de discapacidad auditiva e impuso como obligación al Ministerio Público coordinar "la capacitación del personal necesario con el fin de brindar atención oportuna a las personas con discapacidad auditiva".*

*La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, dará inicio en el mes de septiembre y concluirá en el mes de diciembre, ambos del año 2018. Esta acción formativa tendrá una duración de catorce días, asistiendo a lecciones un día a la semana, con un horario de 08:00 horas a 15:00 horas.*

*Las fechas de los cursos son las que se indican a continuación:*

|  |  |
| --- | --- |
| *LESCO I* | |
| *Sesión* | *Grupo 02* |

|  |  |
| --- | --- |
| *1* | *07 de setiembre de 2018* |
| *2* | *14 de setiembre de 2018* |
| *3* | *21 de setiembre de 2018* |
| *4* | *28 de setiembre de 2018* |
| *5* | *05 de octubre de 2018* |
| *6* | *12 de octubre de 2018* |
| *7* | *19 de octubre de 2018* |

|  |  |
| --- | --- |
| *LESCO II* | |
| *Sesión* | *Grupo 02* |
| *1* | *26 de octubre de 2018* |
| *2* | *02 de noviembre de 2018* |
| *3* | *09 de noviembre de 2018* |
| *4* | *16 de noviembre de 2018* |
| *5* | *23 de noviembre de 2018* |
| *6* | *30 de noviembre de 2018* |
| *7* | *07 de diciembre de 2018* |

*Las personas participantes son las siguientes:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *NOMBRE* | *CÉDULA DE*  *IDENTIDAD* | *OFICINA* | *Grupo* |
| *Irene Chacón Madrigal* | *106590101* | *Área de Valoración Psicosociolaboral Unidad de*  *Capacitación y Supervisión* | *2* |
|  |  |  |  |
| *José David Solano Méndez* | *304890808* | *Fiscalía Adjunta de Cartago* | *2* |
| *Anais Aguilar Alvarez* | *117030179* | *Unidad Administrativa del*  *Ministerio Público* | *2* |
| *Steven Eduardo Hernández Cordero* | *112330687* | *Unidad Administrativa del Ministerio Público* | *2* |
| *Andrea Ulate Porras* | *205700704* | *Oficina de Atención y Protección*  *a la Víctima del Delito* | *2* |

*Se solicita permiso con goce de salario, sin sustitución y viáticos en los casos estrictamente necesarios para las personas participantes. Las personas que se encuentran en la lista, cuentan con el visto bueno de sus respectivas jefaturas.*

*(…)”*

*-0-*

*Se acordó: Acoger la gestión presentada por la licenciada Mayela Pérez Delgado, Fiscala Adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, en consecuencia: 1.) Autorizar la participación, sin sustitución y pago de viáticos en los casos estrictamente necesarios, a las personas de la lista trascrita, para que asistan al curso de LESCO I y II, una vez por semana en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, con un horario de las 08:00 horas hasta las 15:00 horas, iniciando en el mes de setiembre y hasta diciembre de 2018. Lo anterior, siempre y cuando se minimice la afectación del servicio público a cargo de las personas a quienes se les autoriza participar, lo cual implica que darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que por ningún motivo se podrán suspender audiencias previamente señaladas. 2.) En virtud de la importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá las personas participantes coordinar lo necesario, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos al equipo de trabajo del cual forma parte, en lo que les pueda ser de beneficio en el cumplimiento de sus labores, según los requerimientos institucionales. 3.) Indicar a los y las participantes, que la inasistencia a la actividad de referencia, deberá justificarse directamente ante los organizadores y no ante este Consejo.*

*La Dirección de Gestión Humana y los despachos interesados, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara este acuerdo firme.”*

*Indica doña Mayela que la propuesta de la Dirección de Gestión Humana ya fue puesta en conocimiento del Consejo Superior, el cual la conoció en sesión 58-19 de 27 de junio de 2019, Artículo XLVI, en el que se dispuso:*

*“La máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina, las licenciadas Waiman Hin Herera, Subdirectora interina y Cheryl Bolaños, Jefe interina de Gestión de la Capacitación, todas de Gestión Humana, en oficio N° 158-CAP-2019 del 17 de junio de 2019, informaron lo siguiente:*

*“Dando seguimiento a una consulta que realizó este Subproceso de Gestión de la Capacitación en diciembre del año 2017, practicada a las 267 personas servidoras judiciales que a esa fecha contaban con la formación básica de 160 horas en lengua de señas costarricense y que habían cursado los cuatro módulos del programa impartido desde el año 2008 hasta el 2015, y con el fin de validar la efectividad de la formación traducida en el servicio que se presta a esta población y proponer mejoras, se realiza el presente diagnóstico.*

*Asimismo, justifica el presente estudio el voto de la Sala Constitucional número 2017-009630, del 23 de junio del 2017, que establece que por ausencia de personal capacitado en lengua de señas dentro del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, las personas con discapacidad auditiva han encontrado limitaciones en términos de servicio que no les permiten el acceso pleno y efectivo a la justicia.*

*Con la finalidad de que sea debidamente aprobado por ese órgano superior, se rinde el informe solicitado. Se adjunta resumen ejecutivo de este diagnóstico en la página N° 4.*

*Es importante indicar que la propuesta resultante del presente análisis fue debidamente validada el pasado 26 de marzo del 2019, se expuso el análisis conclusivo de la presente investigación a la señora Damaris Vargas Vásquez de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y de Personas en Situación de Discapacidad, señora Melissa Benavides Víquez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia; y al señor Erick Alfaro Romero, Contralor de servicios. Asimismo se expuso formalmente ante la Comisión de Acceso a la Justicia en sesión N° 03-2019 del 4 de abril del 2019, artículo II.”*

*- 0 -*

*Seguidamente se transcribe del citado informe las recomendaciones y la propuesta de capacitación:*

*“(…)*

*RECOMENDACIONES*

*. Se considera necesario fortalecer el programa actual de comunicación básica en lengua de señas costarricense; por tanto, extender la cantidad de módulos de cuatro a seis con 40 horas cada uno, eso resulta un total de 240 horas.*

*Es importante mencionar que las personas formadas en un programa básico de lengua de señas quedan facultadas para comunicarse con un nivel básico de fluidez con la persona usuaria sorda en una recepción o plataforma de atención. La interpretación y traducción a personas participantes en procesos judiciales formales como audiencias, corresponde tramitar el requerimiento por parte de las oficinas y despachos judiciales directamente de peritos oficiales.*

*Para la escogencia de estas personas se debe aplicar el perfil establecido por parte del Subproceso Gestión de la Capacitación, así, las características que deben poseer las personas aspirantes deben ir orientadas a ser una persona colaboradora, con vocación de servicio, con gran sensibilidad hacia las necesidades de los demás, habilidad de comunicación verbal y no verbal.*

*. Según disponibilidad presupuestaria, ofrecer el programa de comunicación básica en lengua de señas costarricense en cada cabecera de provincia. En virtud de que esta necesidad está en función a la cantidad de personas que laboran en cada provincia, considerar que el 65% de la población se concentra en San José y por tanto, se debe aumentar proporcionalmente la cantidad de cupos para la capital.*

*. Para las dependencias que se sitúan en circuitos judiciales, especializar al menos a dos personas clave para que éstas sean quienes reciban a la persona usuaria con discapacidad auditiva (Administraciones, Contraloría de Servicios, etc.). Estas servidoras o servidores deben estar dispuestos a colaborar con otras oficinas o despachos contiguos, según se le requiera y recibir actualizaciones y perfeccionamientos periódicos.*

*Éstas deben contar con la aprobación completa del programa de comunicación básico de Lesco constituido por seis módulos. Asimismo, por medio de procesos formales de escogencia a cargo de la Unidad de Acceso a la Justicia, gradualmente y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, la institución vaya certificando profesionalmente como intérpretes a estas personas claves.*

*. Considerando el 49,46% de personas encuestadas que manifestaron nunca haber recibido en sus oficinas o despachos a una persona con discapacidad auditiva, es importante analizar opciones de tecnología para esas dependencias donde la atención a personas con discapacidad auditiva resulta infrecuente. La institución debe valorar la implementación de softwares especializados con personas traductoras en línea y/o sistemas informáticos de apoyo.*

*Respecto del restante 50,54% de oficinas o despachos que en su mayoría atienden mensualmente entre una y cinco personas usuarias sordas, diferencian cuatro dependencias que señalan recibir más de 6 personas mensualmente, a saber: Recepción de Denuncias O.I.J, Contraloría de Servicios de Primer Circuito Judicial de San José, Juzgado de Violencia Doméstica de Turno Extraordinario de San José y Departamento de Medicina Legal. Se sugiere brindar atención especial a estas dependencias en cuanto a la necesidad de capacitar mayor cantidad de personas en lengua de señas*

*. Realizar refrescamientos y actualizaciones a las personas que ya han aprobado el programa completo de lengua de señas, con actividades de práctica y sensibilización una o dos veces al año.*

*. Las capacitaciones formales en lengua de señas costarricense (Lesco) ofrecidas a personal judicial deben contener, adicional al dominio de las señas, la temática de sensibilización, protocolos de servicio para la población sorda y señas en expresiones jurídicas.*

*Igualmente, para la selección de las personas participantes considerar el perfil de entrada y salida que se determinó en el estudio consulta que realizó este Subproceso Gestión de la Capacitación en diciembre del año 2017, practicado a las personas servidoras judiciales que cuentan con la capacitación básica en Lesco, módulos del I al IV. (Ver Anexo 2).*

*. En estos momentos el Subproceso Gestión de la Capacitación está desarrollando dos cursos virtuales denominados “Derechos Humanos de las personas con discapacidad” y “Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad”, recurso de gran valor para capacitar a toda la población judicial. Se recomienda que estos cursos se establezcan con carácter obligatorio para la población que se forma en los programas de lengua de señas costarricense.*

*. Que la Subcomisión de Acceso a la Justicia de personas en situación de discapacidad y la Unidad de Acceso a la Justicia asuman el mantenimiento, actualización y divulgación de la lista oficial de personas capacitadas en lengua de señas costarricense (Lesco), así como el control y seguimiento de las actualizaciones y refrescamientos de quienes ya están capacitados. Esta lista debe aclarar quienes son personas intérpretes y quienes están en condición de brindar un apoyo básico, pero no de interpretación.*

*Que se realicen las acciones necesarias para aumentar la cantidad de señalizadores visuales y escritos que existen en los edificios del Poder Judicial, para orientar de mejor manera a la población sorda a dirigirse hacia los despachos de su requerimiento.*

*Que se validen otros métodos de atención a la población que no maneja la lengua de señas Lesco ni sabe escribir. Igualmente valorar la implementación de softwares especializados con personas traductoras en línea y/o sistemas informáticos de apoyo. Es importante que la Comisión gestione los recursos económicos que la institución requiere para brindar un servicio público de calidad a las personas con discapacidad, incluido personal capacitado y alternativas accesorias.*

*Que de acuerdo con las necesidades que presenta la población usuaria con discapacidad, determine y gestione los procesos de sensibilización requeridos que deben obtener las personas servidoras judiciales.*

*. Que la Contraloría de Servicios complemente este diagnóstico de necesidades de capacitación interna, con un estudio de identificación de necesidades o deficiencias del servicio judicial prestado a la persona usuaria con discapacidad auditiva, practicado directamente con esta población; lo anterior con fines de mejoramiento de la calidad de nuestro servicio, desarrollo y reforzamiento de la capacitación institucional.*

*. Que la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Subcomisión de Acceso a la Justicia de personas en situación de discapacidad, Unidad de Acceso a la Justicia y la Contraloría de Servicios elaboren de manera participativa con la comunidad sorda, un “Protocolo de atención a las personas con discapacidad” que contenga los pasos a seguir para brindar el servicio adecuado a las diferentes poblaciones con discapacidad.*

*Que promuevan acciones periódicas que procuren el mantenimiento y actualización de los conocimientos adquiridos para las personas servidoras judiciales que han sido capacitadas en la lengua de señas, de manera que se lleven a cabo en todos los circuitos judiciales actividades o conversatorios que sirvan de práctica para reforzar el conocimiento alcanzado.*

*Asimismo, definir la prioridad de cuáles oficinas o personas debe brindárseles la formación en lengua de señas costarricense y otras capacitaciones afines, a partir de las necesidades institucionales.*

*PROPUESTA DE CAPACITACIÓN*

*Con el fin de desarrollar y potenciar las habilidades de atención en el servidor judicial, facilitar el acceso a la justicia sin actos de discriminación, e identificar la lengua de señas como un derecho que le permite interactuar en sociedad a la persona sorda, se presenta el siguiente cuadro de requerimientos de capacitación. La anterior propuesta constituye una guía para dirigir los planes de capacitación del Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana.*

*Para validar la propuesta resultante, el pasado 26 de marzo del 2019 se expuso este análisis conclusivo ante la señora Damaris Vargas Vásquez de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y de Personas en Situación de Discapacidad, señora Melissa Benavides Víquez, Coordin Deliberando respecto de la presentación de los resultados, se comentan a nivel de sugerencias algunos puntos importantes a saber:*

*Incluir incentivos adicionales no monetarios a las personas que se capaciten en LESCO, asociado a evaluación del desempeño por la vocación de servicio; e inclusive, en los ascensos.*

*Evidenciar en los indicadores de gestión que construya la Dirección de Planificación en los despachos rediseñados el tiempo invertido en el servicio de LESCO a personas usuarias de la oficina donde labora u otra del mismo Circuito.*

*Verificar que las oficinas cumplan con el perfil requerido para las personas que sean capacitadas en LESCO para atender a personas usuarias.*

*Priorizar la capacitación en personas que estén en propiedad en la Institución y con mayor estabilidad para administrar los riesgos de movilidad de personal; aunada la vocación de servicio.*

*Indagar sobre soluciones tecnológicas para el nuevo sistema que desarrolla TI pues los costos de capacitar a las personas servidoras judiciales son muy altos, los reportes de servicio no efectivo son muy altos; y a eso hay que sumar la rotación de personal y la necesidad de mantener la actualización lo cual incrementa los costos.*

*Trasladar a Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas en situación de Discapacidad la solicitud que se hace de crear un protocolo de atención a esa población para tener certeza de la forma correcta en que debe atenderse.*

*En relación con las recomendaciones del estudio, se sugiere que los procesos formales de escogencia de personas a capacitar no deben estar a cargo de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas en situación de Discapacidad, sino por la Dirección de Gestión Humana en coordinación con dicha Subcomisión e inclusive la Comisión Institucional de Empleabilidad.*

*Asociar la propuesta al Programa de Lenguaje Democrático que desarrolla CONAMAJ con ocasión de la implementación de la Política de Justicia Abierta.*

*En las recomendaciones que se plantean para la realización de acciones por parte de la Contraloría de Servicios, Comisión de Acceso a la Justicia y Subcomisión, se sugiere que tales funciones se hagan descansar en la Dirección de Gestión Humana, la Unidad de Acceso a la Justicia y la Contraloría de Servicios, en coordinación de ser necesario con la Comisión de Acceso a la Justicia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Discapacidad y la Comisión Institucional de Empleabilidad, pues las Comisiones y Subcomisiones no son oficinas permanentes.*

*Comenta don Erick Alfaro que respecto a la delegación de obligaciones expuestas en las recomendaciones del presente informe, en las Comisiones y Subcomisiones no se pueden operativizar funciones pues éstas carecen de recurso humano disponible para ejecutarlas. Referente, doña Cheryl Bolaños indica que de este estudio resultan funciones importantes que debe definirse claramente a cargo de quién estarán, y quienes deben dar los seguimientos correspondientes.*

*Menciona don Erick Alfaro que los resultados del informe reflejan que las jefaturas que participaron en el proceso manifiestan que la actual capacitación no está siendo tan efectiva como se demanda, considera oportuno realizar un análisis de costo-beneficio para determinar si la capacitación en Lesco a personas servidoras judiciales es lo más conveniente, o se requieren otras alternativas de solución como apoyo de softwares u otros.*

*Comenta doña Melissa Benavides que, en virtud de tantas acciones que se están derivando del estudio expuesto y de la necesidad de mejorar el servicio público a la persona usuaria con discapacidad, conviene hacer un plan de implementación gradual para ir ejecutando lo correspondiente.*

*Informa doña Cheryl Bolaños que este informe finalmente debe presentarse ante el Consejo Superior. Solicita doña Damaris Vargas que previo se expongan estos resultados ante la Comisión de Acceso que se reunirá el próximo jueves 4 de abril. Se acuerda presentar los resultados ante la Comisión de Acceso.*

*Según lo acordado, en sesión N° 03-2019 del 4 de abril del 2019, artículo II, el Subproceso Gestión de la Capacitación también expuso los resultados ante la Comisión de Acceso a la Justicia. Literalmente se expone lo derivado de dicha sesión:*

*“El estudio se realiza debido a que se detectó que hay personas capacitadas por la institución en LESCO que, por diferentes motivos, no podían atender a las personas usuarias que requieren este apoyo para ser orientadas con respecto a los diferentes servicios que brinda el Poder Judicial.*

*Como uno de los puntos analizados, se consideró que la capacitación en LESCO tal vez no es la mejor opción para el Poder Judicial, ya que no se ha estipulado controles para dar seguimiento a las personas capacitadas, en lo referente al lugar donde se ubican (por modificaciones en nombramientos, entre otros) y al estado de los conocimientos adquiridos, ya que no se ha considerado la necesidad de practicarlos. Aunque se aclara que por voto de la Sala Constitucional, el Organismo de Investigación En función de lo anterior, se acordó que se iba a realizar un diagnóstico situacional para conocer el estado de la cuestión. Se identificaron las oficinas donde efectivamente se han atendido a personas sordas y, como hallazgo, hay una gran cantidad de despachos que nunca ha tenido que recibir a una persona en esa condición.*

*Nora Lía Mora apunta que el objetivo es brindar esa orientación inicial que es de suma importancia, por lo que se trata de un dato que puede medirse por la calidad y no por la cantidad.*

*Allan Pow Hing propone solicitar a la Dirección de Tecnología de la Información (TI) que se incluya en el sistema si el despacho cuenta con persona capacitada en LESCO, principalmente pensando en la sostenibilidad de la medida en el tiempo, porque el mantenimiento manual no es viable. Las Administraciones Regionales tienen el deber de alimentar esa base de datos y actualizarla. Se recomienda que esta medida sea para uso interno y que la Contraloría de Servicios tenga conocimiento de la información.*

*Debido a que surgió el tema, Marielos Gamboa aclara que es necesario diferenciar las figuras de intérprete y de personas capacitadas en LESCO, pues los objetivos son distintos.*

*Se acuerda:*

*Se da por recibido el informe por parte de la Sección de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana.*

*Acoger las propuestas planteadas en su totalidad.*

*La Unidad de Acceso a la Justicia se reunirá con TI para efectuar propuestas de mejora al sistema Gio, con el fin de contar con un sistema tecnológico o página web que garantice la sostenibilidad de la herramienta para guardar y procesar la información.*

*La Unidad de Acceso a la Justicia efectuará una campaña para divulgar los acuerdos y compromisos referentes a este tema.*

*La Dirección de Gestión Humana, en conjunto con Contraloría de Servicios, depurará la lista actual de personas capacitadas en LESCO.”*

*- 0 -*

*PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS*

*COSTARRICENSE (LESCO)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *#* | *Función del puesto*  *Asociada* | *Competencia asociada* | *Acciones formativas sugeridas* | *Población* | *Contenidos Básicos* |
| *1.* | *Brindar un servicio*  *público* | *Servicio de calidad* | *Curso virtual*  *“Derechos*  *Humanos de las* | *Toda la población*  *judicial* | *Introducción*  *Accesibilidad*  *Clasificación de* |
| *2.* | *Brindar un servicio público ágil, oportuno y de calidad a las y los usuarios internos y externos de           la*  *institución.* | *Servicio de calidad* | *Curso virtual “Derechos Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad*  *\*curso en proceso de construcción* | *Toda la población judicial* | *Abordaje Histórico*  *“Normalidad”*  *Los derechos humanos*  *Personas*  *con discapacidad*  *Ejemplos* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3.* | *Brindar un servicio público ágil, oportuno y de calidad a las y los usuarios internos y externos de           la*  *institución.* | *Servicio de calidad* | *Taller presencial Sensibilización en atención de personas con discapacidad* | *Personal que atiende público* | *Ley N° 7600 y N° 8661*  *Interacción con personas con discapacidad: visual, auditiva e intelectual*  *Pautas para la atención de personas con discapacidad* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4.* | *Brindar un servicio público ágil, oportuno y de calidad a las y los usuarios internos y externos de           la*  *institución.* | *Servicio de calidad* | *Programa de comunicación básica en lengua de señas costarricense (Lesco), niveles I al IV, módulos de 40 horas cada uno, 240 horas total* | *Personal que atiende público* | *Psicosociología de la población sorda*  *Protocolo de atención a la persona sorda*  *Términos judiciales en Lesco*  *Adquisición de los conocimientos y competencias fundamentales de comunicación*  *en Lesco* |
| *5.* | *Brindar un servicio público ágil, oportuno y de calidad a las y los usuarios internos y externos de           la*  *institución.* | *Servicio de calidad* | *Refrescamientos y actualizaciones en lengua de señas costarricense (Lesco)* | *Personas que ya han concluido el programa de comunicación básica en Lesco* | *Psicosociología de la población sorda*  *Protocolo de atención a la persona sorda*  *Términos judiciales en Lesco*  *Actualizaciones*  *Prácticas presenciales* |
| *6.* | *Brindar un servicio público ágil, oportuno y de calidad a las y los usuarios internos y*  *externos* | *Servicio de calidad* | *Certificación en interpretación de la lengua de señas costarricense (Lesco)* | *Personas que ya han concluido el programa de comunicación básica en Lesco, ubicadas en los circuitos*  *judiciales o* | *Psicosociología de la población sorda*  *Protocolo de atención a la persona sorda*  *Términos judiciales en Lesco* |

*ANEXO NO. 1*

*CUESTIONARIO APLICADO*

*DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE REQUIERE EL PERSONAL JUDICIAL SOBRE EL USO DEL LENGUAJE DE SEÑAS*

*COSTARRICENSE (LESCO)*

*DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A JEFATURAS INSTRUCCIONES GENERALES:*

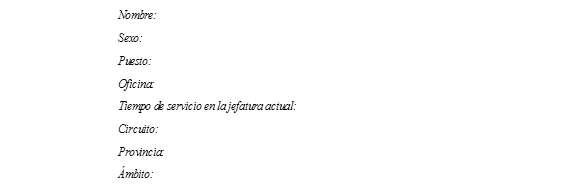
*La institución ha realizado grandes esfuerzos y ha logrado graduar en el programa de formación en la lengua de señas costarricense (Lesco) a 248 personas distribuidas en todos los circuitos judiciales del país. Estas servidoras y servidores han aprobado cuatro módulos de 40 horas cada uno, los cuales les facultan para comunicarse de manera fluida con la persona sorda.*

*Con este instrumento se pretende recabar información valiosa respecto de las         necesidades de capacitación en Lesco que tienen las y los servidores, lo anterior con intención de fortalecer el servicio que brinda el Poder Judicial a la población sorda y avanzar en el cumplimiento de la Le7600 y la resolución de la Sala Constitucional N° 2017-009630, del 23 de junio del 2017.*

*Conteste las preguntas ubicándose en el contexto de la oficina donde labora en este momento. De no haber presenciado personalmente la atención de una persona con discapacidad auditiva, por favor consulte con su equipo de trabajo para completar los diferentes ítems, de manera que en este cuestionario refleje la experiencia del personal de su oficina o despacho, no únicamente sus experiencias.*

*Tome en cuenta que el llenado de este formulario no constituye un compromiso de capacitación, pero servirá de base para la toma de decisiones con respecto a la capacitación en el tema.*

*En caso de consultas por favor comunicarse con Alexandra Madriz Sequeira, al correo electrónico:* [*amadriz@poder-judicial.go.cr*](mailto:amadriz@poder-judicial.go.cr)*, número telefónico: 2295-4421.*



*Notificaciones (correo electrónico y número telefónico):*

*¿Su oficina o despacho actual, cuenta con alguna persona servidora que ha aprobado el programa de formación en la lengua de señas costarricense (Lesco), es decir los cuatro niveles del programa (Nivel I, II, III y IV)?*

*( ) SI  completó los cuatroniveles*

*( ) NO completó ningún nivel*

*( ) Completó uno o más niveles ¿Cuántos?*

*7600 y la resolución de la Sala Constitucional N° 2017-009630, del 23 de*

*junio del 2017.*

*Conteste las preguntas ubicándose en el contexto de la oficina donde labora en este momento. De no haber presenciado personalmente la atención de una persona con discapacidad auditiva, por favor consulte con su equipo de trabajo para completar los diferentes ítems, de manera que en este cuestionario refleje la experiencia del personal de su oficina o despacho, no únicamente sus experiencias.*

*Tome en cuenta que el llenado de este formulario no constituye un compromiso de capacitación, pero servirá de base para la toma de decisiones con respecto a la capacitación en el tema.*

*En caso de consultas por favor comunicarse con Alexandra Madriz Sequeira, al correo electrónico:* [*amadriz@poder-judicial.go.cr*](mailto:amadriz@poder-judicial.go.cr)*, número telefónico: 2295-4421.*

*Nombre:*

*Sexo:*

*Puesto:*

*Oficina:*

*Tiempo de servicio en la jefatura actual:*

*Circuito:*

*Provincia:*

*Ámbito*

*2. De existir, ¿Cuántas personas de su oficina o despacho han completado los cuatro*

*niveles del programa de formación en la lengua de señas costarricense (Lesco)?*

*( )0, 1, 2, 3, 4 o más*

*3. De existir alguna persona en su oficina o despacho capacitada en Lesco, ¿dónde recibió la capacitación?*

*( ) Capacitación financiada por el Poder Judicial*

*( ) Por cuenta propia en Universidad de Costa Rica*

*( ) Por cuenta propia en Universidad Estatal a Distancia*

*( ) Por cuenta propia en ASCODI (Asesoría y consultoría en Discapacidad)*

*( ) Por cuenta propia en ANASCOR (Asociación Nacional de Sordos)*

*( ) Otro. Especifique*

*( ) No hay personas capacitadas en esta oficina*

*4. De existir alguna persona en su oficina o despacho capacitada en Lesco, ¿ésta ha recibido por parte de la institución o por su propio interés algún tipo de refrescamiento o actualización en la lengua?*

*(  )  SI*

*( ) NO*

*( ) No hay personas capacitadas de esta oficina*

*5. ¿Cuál es la frecuencia mensual que su oficina o despacho atiende a alguna persona usuaria con discapacidad auditiva?*

*( ) Ninguna persona*

*( ) 1 a 5personas*

*( ) 6 a 10 personas*

*( ) 11 a 15 personas*

*( ) 16 o más personas*

*6. ¿En caso de haber atendido usted o algún colaborador o colaboradora de su oficina o despacho a una persona sorda, pudo comunicarse en forma clara para satisfacer su necesidad?*

*(  ) SI*

*( ) NO. Especifique*

*( ) Nunca han presenciado la atención a una persona sorda*

*7. Generalmente ¿quién ha brindado la atención a la persona*

*sorda?*

*( ) Personal de la misma oficina*

*( ) Personal de la Contraloría de Servicios*

*( ) Personal judicial de otro despacho que conoce la lengua Lesco*

*( ) Persona intérprete*

*( ) Le han dejado de atender por no poder comunicarse*

*( ) Su oficina nunca ha atendido a una persona sorda*

*8. ¿Existen carteles, letreros, flechas o indicaciones visuales adecuadas para orientar a las personas sordas a dirigirse hasta su oficina o despacho para realizar el trámite que ofrece esa dependencia?*

*(  ) Sí*

*(  ) NO*

*(  ) Insuficientes*

*De las siguientes alternativas, ¿cuál considera usted que podría facilitar la atención a las personas usuarias con discapacidad auditiva?*

*( ) Capacitar a una o más personas de su oficina o despacho en el programa de formación en Lesco (4 niveles de 40 horas cada uno)*

*( ) Actualizar por medio de la práctica del lenguaje a quienes ya terminaron los cuatro niveles del programa*

*( ) Una persona calificada como intérprete que brinde apoyo por circuito judicial*

*( ) Softwares especializados con personas traductoras en línea*

*( ) Otra alternativa. Detalle*

*10. ¿Considera que nuestra institución realiza los esfuerzos necesarios para brindar un trato inclusivo y de calidad hacia las personas con discapacidad auditiva?*

*(  ) SI*

*(  ) NO (Justifique)*

*11. ¿Conoce que hay una lista de servidores y servidoras judiciales que se han capacitado en Lesco y está disponible por circuito desde la Contraloría de Servicios?*

*SI (  )*

*NO (  )*

*12. ¿Conforme a la demanda de personas usuarias sordas que se atienden en su oficina o despacho, la ubicación física, cargas de trabajo y demás características de su dependencia, cuenta el personal con disponibilidad para capacitarse en la lengua de señas costarricense, Lesco?*

*(  ) SI*

*(  ) NO*

*13. ¿Usted o alguna persona de su oficina que aprendió Lesco, tiene interés en participar en talleres de refrescamiento o práctica, dirigidos por facilitadores o facilitadoras sordas?*

*( ) SI*

*( ) NO*

*( ) No hay personas capacitadas de esta oficina*

*14. ¿Con la finalidad de mejorar la atención a las personas sordas, considera adecuada la existencia de un protocolo de atención a la persona sorda?*

*( ) SI*

*( ) NO*

*15. Tiene alguna sugerencia o comentario adicional que estime relevante para fortalecer la atención a la persona sorda. Detalle aquí.*

*- 0 –*

*ANEXO N° 2*

*CONSULTA EFECTIVIDAD DE FORMACIÓN EN LESCO 2017*



*(…)”*

*Microsoft Word 97 - 2003 Documento*

*- 0 -*

*Se acordó: Tomar nota del informe presentado por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina, las licenciadas Waiman Hin Herera, Subdirectora interina y Cheryl Bolaños, Jefe interina de Gestión de la Capacitación, todas de Gestión Humana, mediante oficio N° 158-CAP-2019 del 17 de junio de 2019, referente al diagnóstico de necesidades en lengua de señas costarricense (Lesco). Se declara acuerdo firme.”*

*Expone la integrante Pérez su preocupación pues el Ministerio Público tiene una población muy flotante, lo mismo que el OIJ. De igual forma, el perfil de las personas que atiendan esa población es particular y no cualquier persona lo tiene. Agrega, el diagnóstico que presentó GH al Consejo Superior es el de necesidades no el situacional, y agrega, las capacitaciones se han desarrollado del 7 de setiembre de 2018 al 5 de julio de 2019, como consecuencia del voto de la Sala Constitucional. Los cursos se contrataron con la Universidad de Costa Rica con la colaboración de la Dirección de Gestión Humana.*

*Las integrantes María Felicia y Damaris Vargas indican que mostraron oportunamente su disconformidad con el planteamiento de GH sobre las funciones que se asignaban a la Subcomisión, considerando que no se tiene la capacidad debido a que esta Subcomisión no funciona de manera permanente.*

*El integrante Wilberth Kidd comparte la posición y solicita se gestione de esa manera considerando su impacto en diferentes ámbitos como evaluación de desempeño. Agrega, algunos edificios si tienen esos señalizadores como Guadalupe, Jicaral, sobre todo los más nuevos.*

*Damaris Vargas señala que la capacitación debe darse a todas las personas servidoras judiciales; sin embargo, considerando los costos y tiempo de implementación, es necesario indagar sobre opciones virtuales accesibles con la colaboración de TI.*

*El integrante Otto Lépiz refiere a la situación que se presenta con personas traductoras en lesco quienes no están debidamente capacitados.*

*SE ACUERDA: 1° Se toma nota del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión 58-19 de 27 de junio de 2019, Artículo XLVI, en el que toma nota del Oficio N° 158-CAP-2019 del 17 de junio de 2019 presentado por la Dirección de Gestión Humana. 2° Solicitar al Consejo Superior se declare obligatoria para toda la población judicial los cursos “Derechos Humanos de las personas con discapacidad” y “Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad” y que se ejecuten gradualmente. Priorizar a las personas servidoras judiciales quienes atienden público directamente y después a las demás. 2° En relación con la capacitación en lenguaje de señas costarricense, solicitar al Consejo Superior se disponga se priorice la capacitación a las personas quienes laboran en el Ministerio Público y el OIJ en seguimiento de la resolución emitida por la Sala Constitucional en voto 9630-2017 de 23 de junio de 2017, con la colaboración de Gestión Humana, dando continuidad a las actividad de capacitación que ya han ido desarrollando en 2018 y lo que va de 2019; además, se amplíe al resto de personas servidoras judiciales. Sobre esto último, para una mayor efectividad y considerando el costo de oportunidad de ejecutar tal medida, instar al Consejo Superior solicite a la Dirección Tecnología de la Información priorice el desarrollo o adquiera una alternativa de software que haga la traducción del lenguaje de señas según los requerimientos de las personas usuarias internas y externas. 3° Se declara firme este acuerdo por unanimidad para su ejecución. Comuníquese al Consejo Superior, Direcciones de Gestión Humana, Ejecutiva, Planificación, Escuela Judicial, Tecnología de la Información, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Consejo de la Judicatura, Consejo de Personal y Unidad de Acceso a la Justicia.-*

*Sin otro particular, con estima y consideración,..”*

*Resume de hallazgos y recomendaciones capacitación de Lenguaje en señas Costarricense LESCO,2017*

*En el año 2017 se aplicó un instrumento de consulta con el objetivo de Analizar el proceso de capacitación en el Lenguaje de Señas Costarricense LESCO cursado por 267 personas de los ámbitos Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia en el periodo del 2008 al 2015, con el fin de verificar mejoras en el proceso; ya sea con ampliación de los módulos o mediante la actualización y el refrescamiento.*

*Estas personas concluyeron con éxito los niveles I, II, III y IV que fueron los aprobados como los requeridos para un proceso de capacitación adecuado y el cual fue avalado por el Consejo Superior en la sesión N°70-09 del veintiuno de julio del dos mil nueve, en el artículo XXXII.*

*El instrumento aplicado a estas personas buscaba obtener la información necesaria para validar el proceso que se había realizado años atrás en esta formación, pretendía también mejorar la experiencia en el siguiente proceso de contratación.*

*Del análisis realizado se identificaron algunos hallazgos según lo indicado por 112 personas que completaron el cuestionario. En términos generales se identificó que del total entrevistado un 38% indicó que había utilizado los conocimientos adquiridos en 1 o 3 ocasiones y 34% aseguro haberlo utilizarlo igual o más de seis veces colaborando con en la atención básica logrando el objetivo del proceso de aprendizaje.*

*Cuando se les consultó sobre la eficacia de los contenidos estudiados en el curso y si fue ampliamente abarcado los aspectos básicos de Lesco, se pudo observar que, pese a que fue sumamente enriquecedor el proceso y la experiencia, externaron la necesidad de profundizar más y tropicalizarlo a la realidad institucional, con mayor retroalimentación para mejora y actualización de los conocimientos.*

*La gran mayoría de persona participantes también consideró que se desarrollaron dinámicas grupales adecuadas y que se aplicaron técnicas que propiciaron la participación del grupo de trabajo.*

*Un gran vacío en la capacitación de LESCO realizada fue el seguimiento, ya que más del 98% de personas participantes indican que es necesario para poder implementar lo aprendido, estar en constante reforzamiento, dar continuidad al aprendizaje mediante casos prácticos para realimentar con las demás personas participantes y contar con material didáctico para consulta y repaso. Esto por cuanto la inversión que representa para el Poder Judicial, no sería aprovechado de la mejor forma.*

*Se rescató también lo valioso de colaborar con la población al poder brindar un adecuado acceso a la justicia y la satisfacción que esto conlleva para la persona colaboradora.*

*Mas del 95% consideraba importante retomar el proceso de aprendizaje de LESCO, pero solo el 79.5% indica que puede hacerlo, algunas personas indican que por cargas laborales o permisos de la jefatura se les dificultaba retomarlo.*

*Por lo anteriormente descrito, en el informe realizado se contemplaron algunas recomendaciones para futuras capacitaciones en Lenguaje de señas costarricense, a continuación, se detallan las más importantes:*

*En los procesos de formación iniciar por los aspectos básicos de LESCO (cultura de la población, errores a la hora de comunicarse, entre otros)*

*Como primer aspecto del proceso de formación, considerar la sensibilización al compartir con población sorda.*

*Las personas facilitadoras deben familiarizarse con términos judiciales para que las aborden en las sesiones de trabajo.*

*Realizar procesos de refrescamiento y actualización a las personas que fueron capacitadas en LESCO.*

*Como mínimo, deben participar dos personas facilitadoras en cada sesión; y una de estas personas debe ser sorda.*

*El material que se facilita a las personas participantes para el estudio debe incluir contenido visual, referencia de videos e información básica que aporte como material de repaso.  Y, además, como material de referencia para alguna situación que se les presente.*

*Énfasis en la expresión facial como parte de la comunicación.*

*En los grupos de refrescamiento o actualización debe participar solo población del Poder Judicial para el análisis de situaciones que se dan en común.*

*Se deben buscar medios institucionales para la colaboración a oficinas donde no estén personas formadas en LESCO (video llamada).*

*Posibles limitaciones en la comunicación (que la persona sorda no hable LESCO, no sepa leer o cualquier otra situación que se deba contemplar)*

*Implementar las bases del aprendizaje para adultos en cada proceso formativo.*

*Capacitar en mínimo VII niveles de LESCO a las personas que inicien el proceso.*

*Trabajar en conjunto con la Contraloría de servicios del Poder Judicial y con la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial para validar las nuevas personas por capacitar y el seguimiento oportuno a esta población.*

*Debe asignarse una oficina responsable de dar seguimiento a las personas formadas. El seguimiento que ofrece Gestión Humana depende de los Recursos que se asignen.*

*La Subcomisión de Acceso a la Justicia debe girar las directrices necesarias para que la institución se dote de intérpretes en LESCO*

*Aclarar en el certificado que se emite a las personas participantes, que no son intérpretes, que el conocimiento adquirido es para brindar apoyo básico a personas sordas.*

*Que el curso virtual que está desarrollando Gestión de la Capacitación “Derechos Humanos de las personas con discapacidad”, sea obligatorio para toda la población Judicial.*

*-0-*

*Procede tomar nota del acuerdo anterior.*

*SE ACORDÓ:  Tomar nota.*

*Atentamente,*

*Mba. Lucrecia Chaves Torres*

*Jefatura*

*Sección Administrativa de la Carrera Judicial*

*Dirección de Gestión Humana”*



*SE ACUERDA: Se toma nota.*

***ARTICULO XIV***

Se conoce el Oficio N° 10909-19 de 21 de octubre de 2019, en el que se comunica a la Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 90-19 celebrada el 17 de octubre del 2019, Artículo LXXIV, que literalmente dice:

*“**ARTÍCULO LXXIV*

*DOCUMENTO N° 11591-14, 13041-19*

*La máster Melissa Benavides Víquez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia, mediante oficio N° CACC-330-2019 del 9 de octubre de 2019, gestionó:*

*“Por este medio se remite para su estimable conocimiento, el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad celebrada el pasado 06 de agosto de 2019, en donde se acordó:*

*“ARTICULO X*

*Se conoce gestión de parqueo planteada por el señor Nombre 001, Investigador Informático de la Sección de Delitos Informáticos del OIJ, en el que señala el motivo por el cual no pudo asistir a la sesión ordinaria anterior de la Subcomisión, y expone:*

*De: Nombre 001   
Enviado el: jueves, 01 de agosto de 2019 09:40 a.m.  
Para: Damaris Vargas Vásquez <*[*dvargas@Poder-Judicial.go.cr*](mailto:dvargas@Poder-Judicial.go.cr)*>  
CC: Yorleny Ferreto Solano <*[*yferreto@Poder-Judicial.go.cr*](mailto:yferreto@Poder-Judicial.go.cr)*>  
Asunto: solicitud de parqueo*

*Estimados Señores y Señoras de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad*

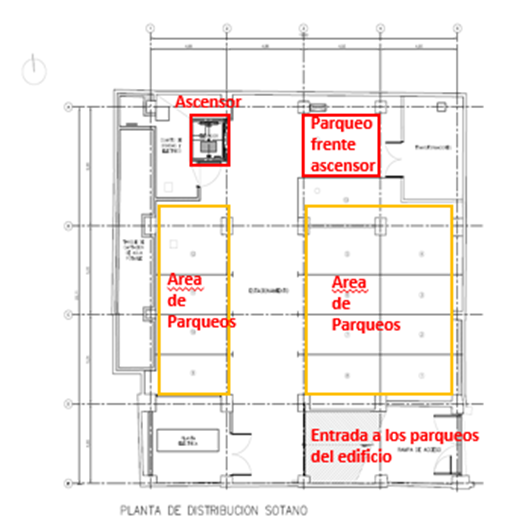
*Reciban un atento saludo y a la vez aprovecho para disculparme por no haber asistido a la cita programada para el 8 de julio a las 10 horas, esto debido a que me realizaron una intervención quirúrgica, y además quiero mencionarles de mi caso y tengan una mayor claridad de los hechos suscitados; en donde debido a un accidente de tránsito que se originó el 10 de diciembre del 2014 en las inmediaciones de Moravia; me provocó un serio daño permanente en mis funciones orgánicas, específicamente en el fémur, astrágalo, radio y pulmones; provocando una enfermedad crónica llamada artrosis que me impide el desplazamiento  como una persona normal y una deficiencia pulmonar; que a pesar de las fisioterapias recibidas, que me ayudaron a tener una mayor movilidad, no se llegó a un 100%, y me pone en una desigualdad frente a mis compañeros. Es por ello que enfocado en la necesidad de tener una igualdad de condiciones y con base en la ley de igualdad de oportunidades ( Ley 7600), la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley para la promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (ley 9379); solicité el día 31 de julio del 2014, a la Comisión de Accesibilidad, propiamente dirigido a la Magistrada Carmen María Soto, un espacio de parqueo, para poder tener una mayor igualdad de condiciones frente a mis compañeros, al no tener una respuesta positiva se remitió al Consejo Superior, la cual ingresó con referencia 11591-14, y se acuerda enviar el oficio a la Dirección Ejecutiva para que realicen un estudio; en dónde se realizaron recordatorios con base en las siguientes referencias 11591-2014, 3828-2015, 4499-2015, 4859-2015, 10210-2015, 12675-2015, 3225-2019, 4401-2019 y el 5708-2019; y no es hasta este año, que mediante el informe 1898-DE-2019 contestan mi solicitud indicando que técnicamente no es viable, por razones de espacio y que valore otras opciones ( como el Teletrabajo), sin embargo a pesar de no estar solicitando teletrabajo, no omito señalar lo indicado en mayo de 2018, por el Licenciado Adolfo M. Valverde Bohórquez, Jefe de Despacho, Dirección General OIJ:*

*“Por este medio, según gestión trasladada a la Dirección General del OIJ por parte de la Jefatura de la Oficina de Planes y Operaciones de este Organismo, e instruido por el Sr. Director General del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, me permito indicar formalmente, que luego de una evaluación interna sobre la posibilidad de iniciar con la aplicación del teletrabajo a lo interno de esta Entidad, se ha decidido por parte del Sr. Director General no ingresar por el momento en esta actividad laboral alternativa”..*

*Es por ello que un teletrabajo no es viable y debido a que en el edificio que laboro existen 11 campos de parqueo  de los cuales 1 pertenece a una unidad policial, 1 pertenece a un funcionario judicial de la Dirección de Planificación pero se encuentra en préstamo a una unidad policial y 9 espacios de personas judiciales que no laboran en ese edificio y no existe ni un solo lugar para personas con discapacidad, logrando así generar una imposibilidad para empleados judiciales con discapacidad o las personas usuarias, que son a quienes nos debemos; y el no permitirme a mi o a un usuario con discapacidad estar en igualdad de y con los demás, generando una discriminación en detrimento de Derecho de Autonomía Personal y el irrespeto a las Derechos Humanos Protegidos por los pactos y tratados internacionales , así como los patrimoniales de todas las personas con discapacidad. Ya que todo establecimiento público y privado deberá contar con dos espacios como mínimo o el 5% del total de espacios disponibles según el reglamento a la ley 7600, capítulo IV, artículo 154 y que va en contrariedad a la circular 63-2007 de la Dirección Ejecutiva que indica claramente, cuando algún servidor judicial requiera un parqueo por su condición física, se deberán tomar las previsiones del caso, a efecto de que el requerimiento se atienda conforme corresponda. Es por ello que acudo a su persona con el fin de ver si existe alguna posibilidad de que me ayude con mi solicitud debido al tiempo transcurrido sin respuesta, y a que existe suficiente espacio en el parqueo para crear un espacio especial, como se puede observar en la imagen que adjunto del parqueo.*



*Imagen No.1 Espacio Frente al ascensor del parqueo existente*



*Imagen No.2 Plano del área de parqueos del edificio*

*Como se logró ver en las imágenes existe suficiente espacio de parqueo para crear un espacio especial para persona con discapacidad ya sea en los parqueos frente al ascensor o en el área de parqueos.*

*Para ello le remito el dictamen médico legal, el informe realizado por la Dirección Ejecutiva respecto a los espacios de personas con discapacidad y quedo a la espera de lo que corresponda.”*



*En sus exposición, el señor Nombre 001 indica, para realizar sus funciones no requiera hacer trabajo de campo, serían pocos lugares donde tener que asistir debido a que trabaja mucho por correo electrónico y con el auxilio de la tecnología. Agrega, en su trabajo contacta mucho con personas que están en otros países por medios electrónicos. Refiere a un informe de la Dirección Ejecutiva en el que se señala hay espacios de parqueo en el edificio de Tribunales que no se han asignado a personas con discapacidad porque no han sido solicitados, están siendo ocupados por vehículos del OIJ. Aduce, el espacio de parqueo para las personas con discapacidad tiene requerimientos especiales; sin embargo, se ajustaría a cualquier espacio en tanto pueda tener acceso, preferiblemente al Anexo C, pero igual le quedaría bien con el parqueo del edificio de Tribunales.*

*Andrea señala que la Administración lo que debe hacer es revisar el espacio y ofrecerles el parqueo conforme a sus condiciones; e inclusive indica, el teletrabajo es voluntaria así que podría tratarse de una discriminación pensar en esa opción a menos que él lo solicite expresamente. De igual forma se estaría violentando su derecho al buscarle solución en un edificio diferente donde él trabaja pues se le estarían manteniendo las barreras. Indica, son diferentes los espacios que deben conforme a la ley reservarse para las personas usuarias con discapacidad que son dos espacios cuando son pocos los parqueos y cuando son varios se trataría del 5%; y los parqueos que la Institución debe facilitar a las personas servidoras con discapacidad.*

*En sesión 05-19, Artículo IV, se tomó el acuerdo que literalmente indica: “SE ACUERDA: Se toma nota de la gestión. Solicitar a la Dirección Ejecutiva informe acerca de los espacios reservados para las personas con discapacidad en los edificios del Primer Circuito Judicial de San José, su ubicación y a quien están asignados en este momento. Lo anterior, a fin de atender la solicitud del señor Nombre 001, quien es una persona con discapacidad, certificado por CONAPDIS. Se declara firme este acuerdo por unanimidad.”*

*SE ACUERDA:*

*3°. Solicitar al Consejo Superior valore emitir una circular en la que se informe sobre el derecho de parqueos que tienen las personas usuarias en situación de discapacidad, así como las personas servidoras judiciales con discapacidad conforme a lo que dispone la Ley 7.600 y demás normativa vinculada, incluyendo las condiciones que deben reunir tales parqueos”.*

*Propuesta de Circular.*

*Circular N° XXX-2019*

*ASUNTO: Disposiciones normativas de acatamiento obligatorio respecto de asignación de espacios de parqueo accesibles para personas con discapacidad tanto para personas usuarias externas como para personas funcionarias judiciales, en cumplimiento de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y norma conexa.*

*A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS*

*SE LES HACE SABER QUE:*

*Por acuerdo de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Discapacidad-Comisión de Acceso a la Justicia, se acordó solicitar al Consejo Superior reiterar a las diferentes Oficinas Judiciales y Unidades Administrativas del país, que tienen bajo su responsabilidad la administración y asignación de los espacios de parqueo en los diferentes circuitos judiciales del país, la necesidad de garantizarles el derecho a las personas usuarias internas y externas en situación de discapacidad acreditada un espacio de parqueo en cumplimiento de las leyes 8661Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su reglamento bajo la siguiente disposiciones:*

*“Artículo 43.- Los establecimientos públicos y privados de servicio al público, que cuenten con estacionamiento, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Pero, en ningún caso, podrán reservarse para ese fin menos de dos espacios. Esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales de atención al público. Las características de los espacios y servicios expresamente para personas con discapacidad serán definidas en el reglamento de esta ley”. Ley 7600.*

*Decreto N°40659-MOPT-MP “Reforma reglamentaria para reforzar el uso de los estacionamientos reservados y la accesibilidad al transporte público colectivo” modifica en su artículo 154, del Decreto Ejecutivo Decreto Nº26831, "Reglamento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad", publicado en La Gaceta N° 75 del 20 de abril de 1998.*

*“Artículo 154.- Estacionamientos reservados. Todo estacionamiento público y privado de atención al público, de acuerdo a lo que disponga de espacios para estacionar vehículos automotores, deberá disponer de espacios destinados a vehículos conducidos por personas con discapacidad o que les transporten. Lo anterior según lo establecido en la siguiente tabla:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Cantidad de espacios mínimos de estacionamiento* | *Estacionamientos reservados accesibles* |
| *De 1 a 40 espacios* | *2* |
| *De 41 a 60 espacios* | *3* |
| *De 61 a 80 espacios* | *4* |
| *De 81 a 100 espacios* | *5* |
| *De 101 a 120 espacios* | *6* |
| *De 121 a 140 espacios* | *7* |
| *De 141 a 160 espacios* | *8* |
| *De 161 a 180 espacios* | *9* |
| *De 181 a 200 espacios* | *10* |
| *Más de 200 espacios* | *Aplicar el 5%* |

*Estos estacionamientos reservados deberán ubicarse en las entradas principales de los locales de atención al público, debidamente identificados con el símbolo internacional de acceso al que se hace referencia en el artículo 105 de este Reglamento.*

*Para señalización a nivel horizontal (a nivel de piso), se debe colocar en el centro del espacio para el estacionamiento, el símbolo internacional de acceso, con dimensiones de un metro por un metro, respetando la proporción y disposición cromática de fondo azul y figura blanca.*

*En cuanto a rotulación vertical, cada dos espacios contiguos, se debe disponer de un rótulo colocado a una altura mínima de 2, 20 metros libres, de manera que no obstaculice el tránsito peatonal sobre la acera ni invada el vado o rampa de ingreso. Este tipo de rótulo debe estar compuesto por la letra "E" en mayúscula, inscrita dentro de un círculo con línea roja y centro blanco, debajo de ésta la palabra "RESERVADO" y en la parte inferior, el símbolo internacional de acceso con dimensiones de 20 centímetros por 20 centímetros, tal y como lo establece el artículo 106 de este Reglamento”.*

*Lo anterior para que se consideren los espacios reglamentarios con sus respectivas características para la atención de usuarios externos con discapacidad., que debe reservar en razón del servicio que brinda el Poder Judicial.*

*En lo que respecta al otorgamiento de espacios de parqueo para personas funcionarias judiciales con discapacidad, cada Oficina Judicial y Unidad Administrativa, deberá considerar las disposiciones establecidas en la ley N°8661, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, , y la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad que en lo sucesivo señalan:*

1. *Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley N°8661*

*Artículo 2. Ajustes razonables “(…) modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad, el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.*

*Artículo 9. “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, (…). Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, y se aplicarán, entre otras cosas a:*

1. *Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; (…)”.*

*Artículo 27 inciso i): “Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; […] Los Estados Parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, […], adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: “Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo”;*

1. *Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.*

*Artículo 23. “Derecho al trabajo. El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales.”*

*Por todo lo anterior, se deberá proporcionar espacios de parqueo (diferentes a los de atención de público) según las necesidades y características de cada funcionario que lo requiera, (siempre, y cuando no se imponga una carga desproporcionada o indebida a la Administración) para garantizar a las personas funcionarias con discapacidad, el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás.”*

*- 0 -*

*En sesión Nº 90-14 celebrada 14 de octubre de 2014, artículo LXXV, de previo a resolver lo que correspondiera se solicitó a la Dirección Ejecutiva que realice el estudio técnico respectivo y rinda a este Consejo el informe correspondiente a la nota del máster Nombre 001, Profesional en Informática 2 de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial.*

*Luego, en sesión Nº 33-15 celebrada el 14 de abril de 2015, artículo XCII, se tuvieron por hechas las manifestaciones de la señora Directora Ejecutiva. Además, se tomó nota de las manifestaciones realizadas por el máster Nombre 001, en su citada condición. Y se hizo una instancia a la Dirección Ejecutiva para que rindiera el informe solicitado en sesión Nº 90-14 celebrada 14 de octubre de 2014, artículo LXXV, con el fin de contar con una pronta respuesta a la gestión planteada.*

*Seguidamente, en sesión N° 78-15 del 1 de setiembre del 2015, artículo XXVIII, se concedió una prórroga de un mes contado a partir de la comunicación del acuerdo a la Dirección Ejecutiva para que remitiera el informe relacionado con el tema de la gestión del señor Nombre 001*

*Además, en sesión N° 45-19 celebrada el 17 de mayo del 2019, artículo XXI, previamente a resolver, se dispuso devolver a la Dirección Ejecutiva el informe para que remita una propuesta tomando en consideración las manifestaciones de los integrantes, referente a realizar un control y lineamientos a seguir para la designación de espacios de parqueos al personal judicial, en aquellos casos de servidores y servidoras con discapacidad de movilidad, ubicando así el espacio a las personas servidoras judiciales que presenten este tipo de discapacidad en el edificio donde laboran, ya que lo que se pretende atender es un problema de accesibilidad y no el económico.*

*Se solicito a la citada Dirección, que analizara las observaciones del servidor Nombre 001, Profesional en Informática 2 de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial.*

*Posteriormente, en sesión N° 59-19 celebrada el 3 de julio del 2019, artículo X, se acogió el informe rendido por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 2697-DE-2019 del 21 de junio de 2019, en el que se detalló que en el edificio Anexo C, conocido como edificio Alpino, el diseño estructural no permite que se pueda adaptar a las características técnicas de accesibilidad de los estacionamientos reservados, conforme lo establece el Reglamento de la Ley 7600, en su artículo 155, por lo que debería la jefatura inmediata del servidor Nombre 001, Investigador Informático de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial, valorar otras opciones para el adecuado desempeño de sus funciones, tomando en cuenta la naturaleza de la labor que desempeña el servidor.*

*También, se aprobaron los criterios de asignación de espacios que se indicaron, los cuales comunicaría la Secretaría de la Corte a las personas servidoras mediante circular.*

*Mediante circular N° 134-19, del 26 de agosto de 2019, se hizo de conocimiento de las personas servidoras judiciales del país, que el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 59-19 celebrada el 3 de julio de 2019, artículo X, dispuso: Aprobar los siguientes criterios de asignación de espacios de parqueo para el personal judicial que presentan algún tipo de discapacidad, los cuales obedecen al orden jerárquico y en igualdad de este al factor antigüedad. Siendo estos los criterios prioritarios, las condiciones.*

*Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva para estudio e informe a este Consejo lo correspondiente. Se declara acuerdo firme.”*

Atentamente,

Lic. Ricardo Calderón Fernández

Prosecretario General interino

Secretaría General de la Corte

c: Máster Melissa Benavides Víquez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia

Diligencias / Refs: (11591-14, 13041-19)

Pt



*SE ACUERDA: 1° Se toma nota. 2° Estar a la espera del informe de la Dirección Ejecutiva solicitado por el Consejo Superior.*

***ARTICULO XV***

La Unidad de Acceso a la Justicia remitió comunicado electrónico del 22 de octubre de 2019, 03:33, a las personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, en la que remitió el: *“… “Formulario de Protección de Datos Sensibles para Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad “en razón del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión No. 89-19, Artículo XCIX.Con la finalidad de obtener insumos para la elaboración de parámetros que permitan definir criterios base para la despersonalización. Asimismo se les solicita de la manera más respetuosa remitir sus aportes a más tardar el próximo martes 29 de octubre.”*

El Formulario señala:

*CRITERIOS PARA DESPERSONALIZAR INFORMACIÓN JUDICIAL DE ACCESO A TERCEROS*

*Conforme lo establece la Ley de Protección de las Personas frente a tratamiento de sus datos personales, Ley No. 8968 (en adelante Ley de Protección de Datos), así como el Reglamento de actuación de la Ley de Protección de las Personas frente a tratamiento de sus datos personales en el Poder Judicial (en adelante Reglamento Institucional) y la circular del Consejo Superior No. 148-19, toda aquella información que se genere en el Poder Judicial, que sea de acceso público, ya sea por Internet o por solicitud de un tercero a través de otros medios, previo a ser entregada o divulgada, debe someterse a un proceso de análisis para identificar si ésta contiene datos sensibles y en caso positivo debe realizarse un proceso de despersonalización con el fin de desvincular aquellos datos que hacen identificable a la persona objeto de protección.*

*De acuerdo con el Reglamento Institucional en su artículo 6 y la circular del Consejo Superior, la persona designada en cada despacho u oficina judicial, responsable de remitir la información a los encargados de la protección de datos, debe generar una alerta a través de los procedimientos establecidos.*

*Es por lo anterior que con el fin de establecer aquellos criterios base que guíen a la identificación de un dato sensible, se hace necesario recopilar información a través de este instrumento, que permita generar un insumo necesario para la toma de decisiones en relación con esta temática.*

*Para los efectos la información debe contestarse conforme a su experiencia en cuanto a la información producida en su oficina o despacho judicial, siendo que para el ámbito jurisdiccional debe realizarse un instrumento por materia. En algunos de los ítems se ejemplifica para dar mayor claridad, no obstante, esa información es meramente informativa. Ahora bien, si uno de los criterios no aplica en su oficina indíquelo como tal.*

1. *Datos Generales*

*Despacho u oficina Judicial:*

*Materia a la que corresponde la información de este instrumento:*

*Nombre de contacto para ampliar información:*

*Extensión:*

*Correo electrónico*

1. *Tipo de información*

*Marque el tipo de información que se produce en su oficina que sea de acceso público (puede elegir diversas opciones)*

*Resoluciones Judiciales*

*Resoluciones inspección judicial*

*Actas de Corte Plena o Consejo Superior*

*Circulares*

*Oficios*

*Dictámenes*

*Otros. Especifique: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.*

1. *Criterios de despersonalización*
   1. *Criterios de despersonalización obligatoria*

*De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, en su artículo 9 y el Reglamento Institucional, artículo 12, los siguientes son los datos que deben ser protegidos de manera obligatoria:*

* *Personas menores de edad*
* *Personas mentalmente incapaces*
* *Víctimas de acoso*
* *Víctimas de delitos sexuales*
* *Víctimas de violencia doméstica*
* *Dirección de la residencia de cualquier persona*
* *Fotografía de cualquier persona*
* *Número de teléfonos privados de cualquier persona*
* *Citaciones Judiciales o notificaciones*
* *Operaciones bancarias o financieras*
* *Otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la persona titular*

*En relación con los siguientes ítems, ejemplifique como interpreta usted qué tipo de información debe ser objeto de protección vinculados a cada uno de ellos:*

* *Citaciones Judiciales o notificaciones*

*Haga clic o pulse aquí para escribir texto.*

* *Operaciones bancarias o financieras*

*Haga clic o pulse aquí para escribir texto.*

* *Otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la persona titular*

*Haga clic o pulse aquí para escribir texto.*

* 1. *Criterios de despersonalización por persona interviniente*

*En el siguiente cuadro se presentan los diferentes tipos de partes que intervienen en un proceso, marque el tipo de parte que aplica para su materia y en la columna respectiva indique los criterios utilizados para despersonalizarlos.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Tipo de parte* | *Se despersonaliza cuando:* |
| *☐Actor*  *☐Víctima*  *☐Recurrente*  *☐Ofendido*  *☐Denunciante*  *☐ Otro. Especifique Haga clic o pulse aquí para escribir texto.* |  |
| *☐Demandado*  *☐Imputado*  *☐Recurrido*  *☐Investigado*  *☐ Otro. Especifique: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.* |  |
| *Testigos* |  |
| *Peritos* |  |
| *Investigadores, policías* |  |
| *Otro tipo de intervención. Especifique Haga clic o pulse aquí para escribir texto.* |  |

* 1. *Criterios de despersonalización por tipo de proceso o delito*

*Indique si existe algún criterio donde conforme al tipo de proceso o delito es obligatoria la despersonalización de la información.*

* 1. *Criterios de despersonalización por cuantía o monto de pago de daños*

*Se ha mencionado que si el monto pagado en daños morales es alto, al publicarse dicha información se estaría poniendo en riesgo a la persona por lo que debe despersonalizarse la resolución. ¿Eso es considerado un dato sensible?*

*Indique si existe algún criterio relacionado con la despersonalización de la información relacionada con el monto de la cuantía o el pago de daños y perjuicios.*

* 1. *Criterios de despersonalización en relación con lugares*

*En relación con los lugares de trabajo o donde se dieron los hechos, se ha indicado que si es una empresa pequeña ésta debe despersonalizarse cuando a partir de la información que contiene el documento se podría identificar a la parte vulnerable, diferente es cuando el lugar de trabajo tiene mucho personal por ejemplo el MEP, esta Institución no se despersonalizaría no así el nombre de la Escuela.*

*Indique si existe criterio en relación con el ocultamiento de la información relativa con el lugar de trabajo, o el lugar donde se llevaron a cabo los hechos.*

* 1. *Criterios de despersonalización por persona considerada figura pública*

*Se han presentado casos donde se están juzgando personas consideradas figuras públicas, cuyos delitos son del ámbito privado, sin embargo, existen criterios encontrados respecto que por transparencia no debe despersonalizarse la información.*

*Indique si existe criterio en relación con el ocultamiento de la información relativa con las personas consideradas figuras públicas.*

* 1. *Criterios de despersonalización en relación con las poblaciones vulnerables*

*Indique los criterios utilizados para la información relativa con las poblaciones vulnerables. De ser posible trate de realizarlo una a una.*

* 1. *Criterios de despersonalización en relación con problemas de adicción a las drogas, alcoholismo, callejización y problemas de salud.*

*Indique si existe criterio en relación con el ocultamiento de la información señalada.*

* 1. *Criterios de despersonalización en relación con la identificación de números de: cuentas bancarias, inscripciones de bienes muebles o inmuebles, sociedades, cédulas jurídicas, protocolos, etc.*

*Uno de los temas en discusión es que si la protección de datos debe cobijar aspectos como los datos de inscripción de los protocolos por cuanto a través de éstos se podría identificar a las personas, sin embargo, existe otra corriente que manifiesta que eso es “hilar muy delgado”.*

*Indique los criterios utilizados para este tipo de información, puede indicarlo uno a uno si fuera necesario. De ser posible trate de realizarlo una a una.*

* 1. *Criterios de despersonalización en relación con los representantes, apoderados de las partes e instituciones y representante sindicales.*

*Indique si existe criterio en relación con el ocultamiento de la información señalada.*

* 1. *Criterios de despersonalización en relación con las personas funcionarias públicas en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito privado*

*Indique si existe criterio en relación con el ocultamiento de la información respecto a las personas funcionarias públicas*

* 1. *Criterios de despersonalización en relación con casos mediáticos*

*Indique si existe criterio en relación con el ocultamiento de la información señalada.*

* 1. *Criterios de NO despersonalización*

*Mencione en qué casos se ha definido cuando la información no debe ser despersonalizada.*

* 1. *Criterios sobre el Derecho al Olvido*

*Indique cuáles criterios se aplican en su materia respecto al derecho al olvido*

* 1. *Otros criterios*

*En caso de haberse omitido algún otro criterio favor incluirlo a continuación:*

*”*

Se conocen las sigerencias enviadas por el señor Otto Lépiz.



*SE ACUERDA: 1° Se toma nota. 2° Trasladar a la Unidad de Acceso a la Justicia las sugerencias enviadas por el señor Otto Lépiz en representación de la Defensoría de los Habitantes.*

***ARTICULO XVI***

En comunicado electrónico del 30 de octubre de 2019, 11:34 horas, la jueza Damaris Vargas Vásquez, en su condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, remitió propuesta al Magistrado Jorge Olaso Alvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, y a la Unidad de Acceso en la que señaló:

*“Estimado don Jorge: Reciba un cordial saludo. Tengo el gusto de comentarle que el licenciado Otto Eduardo Lépiz, representante de la Defensoría de los Habitantes en el tema de Discapacidad, e integrante de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, mostró su anuencia a compartir con nosotros los ejemplares que han publicado de las ediciones de la Revista Dis-Capacidad en Acción. La publicación se hace con ocasión del cumplimiento de uno de los aspectos contemplados en el Plan Anual Operativo del Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación con las cuales el Poder Judicial también tiene compromisos.*

*Con ocasión de lo anterior, le planteo respetuosamente, la siguiente solicitud:*

1. *Socializo el contenido de la Revista con usted y demás personas integrantes de la Comisión para su conocimiento, con el ruego especial de que se valore la inclusión de la información en la página web de la Comisión de Acceso a la Justicia, en el apartado de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad; o bien, un link que direccione su contenido a la página web de la Defensoría para no duplicar información interinstitucional.*
2. *Aprovecho para sugerir a la Comisión de Acceso a la Justicia valore la posibilidad de que la Comisión emita una Revista Virtual, relacionada con las acciones emprendidas por las diferentes Subcomisiones, entre ellas y especialmente, las de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y la de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas pues es muy importante que las personas usuarias externas e internas sean comunicadas de los avances que hemos logrado como Institución.*

*Desde ya mi disposición a colaborar en esta propuesta en caso de que exista anuencia de la Comisión.”*



*SE ACUERDA: 1° Se toma nota. 2° Solicitar a la Unidad de Acceso a la Justicia informe sobre los avances de la solicitud planteada por la jueza Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad.-*

***ARTICULO XVII***

La Unidad de Acceso a la Justicia remitió comunicado electrónico del 4 de noviembre de 2019, 04:14 horas, a las personas coordinadoras de las Subcomisiones de Acceso a la Justicia, en el que indicó:

***Personas Integrantes***

***Subcomisiones de Acceso a la Justicia de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad***

***Estimadas Personas Integrantes:***

*Reciban un respetuoso saludo. Por medio de la presente, se les informa para su estimable conocimiento el correo remitido el día de hoy por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y su documentación adjunta. Asimismo se les solicita de la manera más respetuosa, remitir sus aportes a más tardar el próximo jueves 7 de noviembre por este medio.”*



**República de Costa Rica**

**Poder Judicial**

**Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales**

4 de noviembre de 2019

Señor

**Jorge Olaso Álvarez**

Coordinador

Comisión de Acceso a la Justicia

Presente

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo.  Con instrucciones de la señora Karen Leiva Chavarría, Jefa de esta oficina, me es grato dirigirme a usted muy respetuosamente, en ocasión de hacer de su estimable conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia, para dar respuesta a la “Lista de cuestiones relativa a los informes periódicos quinto y sexto combinados de Costa Rica”.

Lo anterior, en el marco del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país en 1990 y como parte del proceso de presentación del Informe por parte del Estado,  correspondiente a los periódicos V y VI combinados de Costa Rica ante el Comité de los Derechos del Niño, que fue elaborado durante el año 2016 (Se adjunta y sus anexos).

Para este fin, se confeccionó un formulario en Excel denominado “Formulario Estadísticas CD!’!”, el cual indica los datos estadísticos que se requiere sean brindados por la institución que usted representa y contiene las instrucciones para su llenado.

Por ello. solicitamos muy respetuosamente remitir el “Formulario Estadísticas CDN’~ así como los documentos, bases de datos o archivos adjuntos que aporten los datos estadísticos solicitados, a más tardar **el día viernes 8 de noviembre**, a los correos electrónicos: [amorac@poder-juidicial.go.cr](mailto:amorac@poder-juidicial.go.cr) , con copia al correo [ocri@poder-judicial.go.cr](mailto:ocri@poder-judicial.go.cr)

Agradecemos de antemano la valiosa atención que pueda brindar a la presente comunicación y quedamos a total disposición ante cualquier consulta.

Con las muestras de mi más alta consideración y estima …”

La solicitud en referencia fue puesta en conocimiento de las personas integrantes de la Subcomisión mediante comunicado electrónico del 05 de noviembre de 2019 02:52 a.m., por parte de la jueza Coordinadora de la Subcomisión, Damaris Vargas Vásquez, en el que se indicó: *“Buenos días. Traslado para su conocimiento y remisión de aportes a más tardar el próximo jueves 7 de noviembre.”*



*SE ACUERDA: Se toma nota del traslado a las personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas en situación de Discapacidad para que trasladen sus sugerencias y observaciones a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, si a bien lo tienen.-*

*Esta acta se traslado a las personas integrantes de la Subcomisión de manera electrónica confiriéndose el plazo de tres días para remitir observaciones, las cuales están incorporadas.*

***Magistrado Jorge Olaso Álvarez***

***Coordinador Comisión de Acceso a la Justicia***

***Jueza Damaris Vargas Vásquez***

***Coordinadora Subcomisión Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad***